

INE/CG796/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020
DENUNCIANTES: ANA ROSA FIGUEROA
CARRIZALES, OTRAS Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA EN CONTRA DE PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN AL DERECHO POLÍTICO DE LIBRE AFILIACIÓN DE ANA ROSA FIGUEROA CARRIZALES, CÉSAR ADRIÁN TOVAR ZAMORA, MICHELLE HAIRAM SANTIAGO ARMENTA, BRANDON ESTEBAN MARTÍNEZ VILLEDA, MARÍA CONCEPCIÓN CÓRDOVA MÉNDEZ, KARINA IVÓN LÓPEZ MAYO, SANDRA CRUZ REYNOSO GARCÍA, MIRZA ELIZABETH VELÁZQUEZ GÓMEZ, JOSÉ ÁNGEL ZAMBRANO LÓPEZ, KARINA OBREGÓN ALONSO, JUAN RAMÓN ERIC GARCÍA GUERRERO, HERIBERTO ARAGÓN GUEVARA, JESÚS ANDRADE FIERRO, PERLA PAULINA GARCÍA BARRERA, ALEJANDRO AYÓN LUNA, REYNA GRISELDA NAVARRO MERCADO, GILBERTO ESPINOZA ÁLVAREZ, GLORIA JIMENA MONTAÑO LÓPEZ, EDUARDA ESMERALDA CASTILLO CALVILLO, AURORA MARÍA OLVERA MÉNDEZ, FRANCISCO LÓPEZ ALARCÓN, HERIBERTO ROGEL MARTÍNEZ, LIDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARTHA PATRICIA RAMÍREZ SANTAMARÍA Y JOSÉ ANTONIO CAUDILLO CORAL, QUIENES ASPIRABAN AL CARGO DE SUPERVISOR Y/O CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Comisión de Quejas	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DECEYEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
IFE	Instituto Federal Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
Manual	Anexo 5 de rubro “Procedimiento para la Compulsa de la credencial de elector” del Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG189/2020
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

R E S U L T A N D O

1. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE* veinticinco escritos de queja signados por igual número de personas quienes, alegaron la posible transgresión a su derecho político de libre afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación— atribuida al *PVEM* y, en su caso el uso de sus datos personales para tal fin.

No.	Quejosa o quejoso	Fecha de recepción en la <i>UTCE</i>
1	Ana Rosa Figueroa Carrizales	27/11/2020 ¹
2	César Adrián Tovar Zamora	01/12/2020 ²
3	Michelle Hiram Santiago Armenta	01/12/2020 ³
4	Brandon Esteban Martínez Villeda	27/11/2020 ⁴
5	María Concepción Córdova Méndez	27/11/2020 ⁵
6	Karina Ivón López Mayo	27/11/2020 ⁶
7	Sandra Cruz Reynoso García	26/11/2020 ⁷
8	Mirza Elizabeth Velázquez Gómez	24/11/2020 ⁸
9	José Ángel Zambrano López	30/11/2020 ⁹
10	Karina Obregón Alonso	27/11/2020 ¹⁰
11	Juan Ramón Eric García Guerrero	30/11/2020 ¹¹
12	Heriberto Aragón Guevara	02/12/2020 ¹²
13	Jesús Andrade Fierro	27/11/2020 ¹³
14	Perla Paulina García Barrera	27/11/2020 ¹⁴
15	Alejandro Ayón Luna	02/12/2020 ¹⁵
16	Reyna Griselda Navarro Mercado	01/12/2020 ¹⁶
17	Gilberto Espinoza Álvarez	01/12/2020 ¹⁷

¹ Visible a hojas 01 a 02 del expediente.

² Visible a hojas 08 a 09 del expediente.

³ Visible a hojas 15 a 16 del expediente.

⁴ Visible a hojas 24 a 25 del expediente.

⁵ Visible a hojas 32 a 33 del expediente.

⁶ Visible a hojas 39 a 40 del expediente.

⁷ Visible a hojas 45 a 46 del expediente.

⁸ Visible a hojas 52 a 53 del expediente.

⁹ Visible a hojas 61 a 62 del expediente.

¹⁰ Visible a hojas 70 a 71 del expediente.

¹¹ Visible a hojas 87 a 88 del expediente.

¹² Visible a hojas 77 a 78 del expediente.

¹³ Visible a hojas 92 a 94 del expediente.

¹⁴ Visible a hojas 101 a 102 del expediente.

¹⁵ Visible a hojas 109 a 110 del expediente.

¹⁶ Visible a hojas 117 a 118 del expediente.

¹⁷ Visible a hoja 125 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

No.	Quejosa o quejoso	Fecha de recepción en la UTCE
18	Gloria Jimena Montaña López	30/11/2020 ¹⁸
19	Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo	30/11/2020 ¹⁹
20	Aurora María Olvera Méndez	30/11/2020 ²⁰
21	Francisco López Alarcón	27/11/2020 ²¹
22	Heriberto Rogel Martínez	30/11/2020 ²²
23	Lidia Hernández Hernández	01/12/2020 ²³
24	Martha Patricia Ramírez Santamaría	30/11/2020 ²⁴
25	José Antonio Caudillo Coral	01/12/2020 ²⁵

2. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE BAJA COMO MILITANTES DE PVEM.²⁶ El catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante acuerdo emitido por el Titular de la UTCE, se ordenó formar el expediente respectivo e iniciar el trámite del presente procedimiento sancionador ordinario, el cual quedó registrado bajo la clave **UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020**, mismo que fue admitido a trámite.

Asimismo, se reservó lo conducente al emplazamiento de las partes, hasta en tanto hubiere concluido la etapa de investigación.

Adicionalmente, y con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió a la *DEPPP* y al *PVEM*, a efecto de que proporcionaran información relacionada con la presunta indebida afiliación de las y los denunciantes, lo cual fue desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
DEPPP	INE-UT/4832/2020 ²⁷	18/12/2020 Correo electrónico ²⁸ Informa el estado que guardan las afiliaciones denunciadas.

¹⁸ Visible a hojas 130 a 131 del expediente.

¹⁹ Visible a hojas 138 a 139 del expediente.

²⁰ Visible a hoja 147 del expediente.

²¹ Visible a hojas 153 a 154 del expediente.

²² Visible a hojas 161 a 162 del expediente.

²³ Visible a hojas 171 a 172 del expediente.

²⁴ Visible a hojas 179 a 180 del expediente.

²⁵ Visible a hojas 187 a 188 del expediente.

²⁶ Visible a hojas 196 a 207 del expediente.

²⁷ Visible a hoja 215 del expediente.

²⁸ Visible a hojas 231 a 233 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
PVEM	INE-UT/4831/2020 ²⁹	<p style="text-align: center;">Oficios:</p> <p style="text-align: center;">18/12/2020 PVEM-INE-351/2020³⁰ Informa el estado que guardan las afiliaciones denunciadas.</p> <p style="text-align: center;">24/12/2020 PVEM-INE-365/2020³¹ Aportó las cédulas de afiliación de 4 personas denunciantes.</p> <p style="text-align: center;">30/12/2020 PVEM-INE-376/2020³² Aportó las cédulas de afiliación de 6 personas denunciantes.</p>

Finalmente, en dicho acuerdo se solicitó al *PVEM* que realizara la baja de las y los denunciantes, de su catálogo de militantes en el Sistema de Verificación de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, de su página de internet y en cualquier otra base pública en la que pidieren encontrarse, en el caso de que aún estuvieran inscritas en el mismo.

3. PRÓRROGA AL PARTIDO VERDE ECLOGISTA DE MÉXICO Y ELABORACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA.³³ Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, se concedió la prórroga solicitada mediante oficio PVEM-INE-351/2020 por el *PVEM*, a efecto de que, en el plazo de tres días, proporcionara el original de las constancias de afiliación correspondientes a **Ana Rosa Figueroa Carrizales, César Adrián Tovar Zamora, Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Fierro Andrade, Perla Paulina García Barrera, Alejandro Ayón Luna, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo, Aurora María Olvera Méndez, Francisco López Alarcón, Heriberto Rogel Martínez, Lidia Hernández Hernández, Martha Patricia Ramírez Santamaría y José Antonio Caudillo Coral**, haciéndole de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, tendría como consecuencia que en el momento procesal oportuno se resolvería con las constancias existentes en autos.

²⁹ Visible a hoja 216 del expediente.

³⁰ Visible a hojas 234 a 236 del expediente.

³¹ Visible a hoja 285 y anexos de 286 a 293 del expediente.

³² Visible a hoja 299 y anexos 300 a 311 del expediente.

³³ Visible a hojas 327 a 332 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Dicho acuerdo fue diligenciado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
<i>PVEM</i>	INE-UT/01022/2020 ³⁴	<p style="text-align: center;">Oficios:</p> <p style="text-align: center;">16/02/2021 PVEM-INE-186/2021³⁵ Aportó las cédulas de afiliación de 2 personas denunciantes.</p> <p style="text-align: center;">02/03/2021 PVEM-INE-206/2021³⁶ Aportó las cédulas de afiliación de 4 personas denunciantes.</p> <p style="text-align: center;">15/03/2021 Correo electrónico PVEM-INE-224/2021³⁷ Aportó la cédula electrónica de afiliación de una denunciante.</p> <p style="text-align: center;">18/11/2021 PVEM-INE-546/2021³⁸ Aportó la cédula de afiliación de 1 persona denunciante.</p> <p style="text-align: center;">30/11/2021 PVEM-INE-573/2021³⁹ Aportó la cédula de afiliación de 1 persona denunciante.</p>

De igual forma, se ordenó la inspección del contenido de la página de internet de *PVEM*, a efecto de verificar si las y los denunciantes, continuaban apareciendo en el padrón de militantes de dicho instituto político, advirtiéndose que ya no estaban registrados, resultado constó en acta circunstanciada instruida por el personal de la *UTCE*.⁴⁰

4. VISTA A DENUNCIANTES.⁴¹ Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a **César Adrián Tovar Zamora, Brandon Esteban Martínez**

³⁴ Visible a hoja 349 del expediente.

³⁵ Visible a hoja 357 y anexos de 358 a 361 del expediente.

³⁶ Visible a hoja 398 y anexos de 399 a 407 del expediente.

³⁷ Visible a hojas 454 a 457 del expediente.

³⁸ Visible a hoja 618 y anexos de 619 a 620 del expediente.

³⁹ Visible a hojas 629 a 630 y anexo 631 del expediente.

⁴⁰ Visible a hojas 333 a 347 del expediente.

⁴¹ Visible a hojas 443 a 451 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Villeda, María Concepción Córdova Méndez, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, José Ángel Zambrano López, Juan Ramón García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Lidia Hernández Hernández y José Antonio Caudillo Coral, con las cédulas de afiliación proporcionadas por el instituto político, en este caso *PVEM*, de conformidad con el siguiente cuadro:

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
1	Brandon Esteban Martínez Villeda	12/04/2021 ⁴²	No desahogó la vista
2	Karina Ivón López Mayo	01/04/2021 ⁴³	No desahogó la vista
3	Sandra Cruz Reynoso García	23/04/2021 ⁴⁴	No desahogó la vista
4	Mirza Elizabeth Velázquez Gómez	30/03/2021 ⁴⁵	No desahogó la vista
5	José Ángel Zambrano López	30/03/2021 ⁴⁶	No desahogó la vista
6	Juan Ramón Eric García Guerrero	01/04/2021 ⁴⁷	No desahogó la vista
7	Heriberto Aragón Guevara	13/04/2021 ⁴⁸	No desahogó la vista
8	Jesús Andrade Fierro	06/04/2021 ⁴⁹	No desahogó la vista
9	Perla Paulina García Barrera	31/03/2021 ⁵⁰	No desahogó la vista
10	Reyna Griselda Navarro Mercado	30/03/2021 ⁵¹	No desahogó la vista
11	Gilberto Espinoza Álvarez	30/03/2021 ⁵²	No desahogó la vista
12	Gloria Jimena Montaña López	31/03/2021 ⁵³	No desahogó la vista
13	Lidia Hernández Hernández	31/03/2021 ⁵⁴	No desahogó la vista
14	José Antonio Caudillo Coral	01/04/2021 ⁵⁵	No desahogó la vista

Únicamente **César Adrián Tovar Zamora y María Concepción Córdova Méndez** formularon manifestaciones:

Denunciante	Notificación	Respuesta	Manifestaciones
César Adrián Tovar Zamora	28/04/2021 ⁵⁶	03/05/2021 ⁵⁷ Escrito	<i>Por medio del presente escrito de mi puño y letra yo César Adrián Tovar</i>

⁴² Visible a hojas 528 a 530 del expediente.

⁴³ Visible a hojas 472 a 477 y 552 a 554 del expediente.

⁴⁴ Visible a hojas 582 a 584 del expediente.

⁴⁵ Visible a hojas 511 a 514 del expediente.

⁴⁶ Visible a hojas 468 a 471 del expediente.

⁴⁷ Visible a hojas 521 a 526 del expediente.

⁴⁸ Visible a hojas 534 a 540 del expediente.

⁴⁹ Visible a hojas 577 a 580 del expediente.

⁵⁰ Visible a hojas 459 a 461, 480 a 481 y 587 a 589 del expediente.

⁵¹ Visible a hojas 516 a 519 del expediente.

⁵² Visible a hojas 497 a 509 del expediente.

⁵³ Visible a hojas 483 a 488 del expediente.

⁵⁴ Visible a hojas 491 a 495 del expediente.

⁵⁵ Visible a hojas 567 a 569 del expediente.

⁵⁶ Visible a hojas 556 a 563 del expediente.

⁵⁷ Visible a hojas 570 a 572 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Denunciante	Notificación	Respuesta	Manifestaciones
	Plazo del 29 de abril al 03 de mayo de 2021		<p><i>Zamora declaro que el documento que el Partido Verde Ecologista de México de la campaña de actualización de afiliación 2016-2017 presenta datos que no fueron proporcionados por mí y que claramente no fueron escritos por mí, destacando que mi segundo nombre esta incorrecto, además mi firma no está escrita por mí, ni esta correcta.</i></p> <p><i>Hágase comparar este escrito con el documento presentado por el Partido Verde ecologista de México para confirmar que la escritura es diferente de la mía, demostrando que la afiliación fue hecha sin mi consentimiento.</i></p>
María Concepción Córdova Méndez	31/03/2021 ⁵⁸ Plazo del 01 al 05 de abril de 2021	05/04/2021 ⁵⁹ Escrito	<p>...</p> <p><i>Deseo manifestar categóricamente que nunca me he afiliado al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por lo que se han hecho mal uso de mis datos personales y en consecuencia solicito se me desafilie del Partido en comento.</i></p> <p>...</p>

5. REQUERIMIENTO A LA DERFE Y VISTA A DENUNCIANTE.⁶⁰ Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la **DERFE**, a efecto de que informara, entre otras cuestiones, si la cédula de **Ana Rosa Figueroa Carrizales** fue realizada mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano INE” y de ser el caso, proporcionara la misma, lo cual fue desahogado de la siguiente manera:

Sujeto	Requerimiento	Respuesta
DERFE	13/07/2021 Correo electrónico ⁶¹	Sin respuesta

⁵⁸ Visible a hojas 462 a 465 del expediente.

⁵⁹ Visible a hoja 479 del expediente.

⁶⁰ Visible a hojas 590 a 597 del expediente.

⁶¹ Visible a hoja 602 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

De igual forma, se dio vista a **Ana Rosa Figueroa Carrizales**, con la documentación relacionada a su afiliación, proporcionada por el *PVEM*, de conformidad con el siguiente cuadro:

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
1	Ana Rosa Figueroa Carrizales	15/07/2021 ⁶²	No desahogo vista

6. RECORDATORIO A LA DERFE.⁶³ Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a la *DERFE*, a efecto de que informara, entre otras cuestiones, si la cédula de **Ana Rosa Figueroa Carrizales** fue realizada mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano INE” y de ser el caso, proporcionara la misma, lo anterior, en virtud de que no se recibió respuesta por parte de dicha dirección, respecto a la información solicitada mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, lo anterior, fue desahogado de la siguiente manera:

Sujeto	Requerimiento	Respuesta
<i>DERFE</i>	26/10/2021 Oficio: INE/UT/9835/2021 ⁶⁴	12/11/2021 Correo electrónico ⁶⁵ La afiliación sí se realizó a través de la referida aplicación.

7. VISTA A DENUNCIANTE.⁶⁶ Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a **Francisco López Alarcón**, con la documentación relacionada a su afiliación, proporcionada por el *PVEM*, lo anterior se llevó a cabo de acuerdo a lo siguiente:

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
1	Francisco López Alarcón	03/12/2021 ⁶⁷	No desahogó la vista

8. VISTA A EDUARDA ESMERALDA CASTILLO CALVILLO.⁶⁸ Por acuerdo de catorce de enero de dos mil veintidós, se dio vista a **Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo**, con la documentación relacionada a su afiliación, proporcionada por el *PVEM*, lo anterior se llevó a cabo de conformidad a lo siguiente:

⁶² Visible a hojas 604 a 606 del expediente.

⁶³ Visible a hojas 607 a 609 del expediente.

⁶⁴ Visible a hoja 612 del expediente.

⁶⁵ Visible a hoja 613 y anexos de 614 a 617 del expediente.

⁶⁶ Visible a hojas 621 a 625 del expediente.

⁶⁷ Visible a hojas 634 a 638 del expediente.

⁶⁸ Visible a hojas 639 a 643 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

No.	Denunciante	Notificación	Respuesta
1	Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo	21/01/2022 ⁶⁹	No desahogó la vista

9. NOTIFICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE DECEYEC, ASÍ COMO A LOS VOCALES EJECUTIVO, Y DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DE LA JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS DE ESTE INSTITUTO Y EMPLAZAMIENTO.⁷⁰ En virtud de que el presente procedimiento inició con motivo de las quejas presentadas por **Ana Rosa Figueroa Carrizales, César Adrián Tovar Zamora, Michelle Hiram Santiago Armenta, Brandon Esteban Martínez Villeda, María Concepción Córdova Méndez, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, José Ángel Zambrano López, Karina Obregón Alonso, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Alejandro Ayón Luna, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo, Aurora María Olvera Méndez, Francisco López Alarcón, Heriberto Rogel Martínez, Lidia Hernández Hernández, Martha Patricia Ramírez Santamaría y José Antonio Caudillo Coral**, quienes estuvieron participando en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales en el marco del proceso electoral federal 2020-2021, mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la Dirección de Capacitación de DECEYEC y a las correspondientes Juntas Distritales Ejecutivas de este Instituto, con las respuestas emitidas por el PVEM, así como de lo informado por la DEPPP, y las manifestaciones formuladas por **César Adrián Tovar Zamora y María Concepción Córdova Méndez**, respecto del asunto que nos ocupa.

Por otra parte, en el referido acuerdo, se ordenó **emplazar** al PVEM, como sujeto denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que estimara pertinentes, con relación a los hechos denunciados.

Cabe señalar, que para tal efecto se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

⁶⁹ Visible a hojas 649 a 651 del expediente.

⁷⁰ Visible a Hojas 652 a 668 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Denunciado	Oficio	Cédula – Plazo	Contestación al Emplazamiento
PVEM	INE-UT/02711/2022 ⁷¹	Citatorio: 30/03/2022 ⁷² Cédula: 31/03/2022 ⁷³ Plazo: 01 al 07 de abril de 2022.	Escrito ⁷⁴ 07/04/2022

10. ALEGATOS.⁷⁵ El nueve de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes, a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, acuerdo que fue notificado y desahogado conforme al siguiente cuadro:

Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
Ana Rosa Figueroa Carrizales	Sin número ⁷⁶	Notificación: 15/06/2022 Plazo: del 16 al 22 de junio 2022.	Sin respuesta
César Adrián Tovar Zamora	INE/JDE03/AGS/VS/504/2022 ⁷⁷	Notificación: 14/06/2022 Plazo: del 15 al 21 de junio 2022.	Sin respuesta
Michelle Hairam Santiago Armenta	INE/BCS/JDE01/VE/0105/2022 ⁷⁸	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
Brandon Esteban Martínez Villeda	JDE04-CM/09000/2022 ⁷⁹	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
María Concepción Córdova Méndez	INE/JDE09-CM/0696/2022 ⁸⁰	Notificación: 14/06/2022 Plazo: del 15 al 21 de junio 2022.	20/06/2022 Escrito ⁸¹
Karina Ivón López Mayo	INE/CHIS/01JDE/VS/235/2022 ⁸²	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
Sandra Cruz Reynoso García	INE/CHIS/JDE03/VE/1108/2022 ⁸³	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
Mirza Elizabeth Velázquez Gómez	INE/08JDE/VS/328/2022 ⁸⁴	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta

⁷¹ Visible a hoja 674 del expediente.

⁷² Visible a hojas 675 a 676 del expediente.

⁷³ Visible a hoja 677 del expediente.

⁷⁴ Visible a hojas 681 a 700 del expediente.

⁷⁵ Visible a hojas 701 a 704 del expediente.

⁷⁶ Visible a hojas 912 a 915 del expediente.

⁷⁷ Visible a hojas 842 a 851 del expediente.

⁷⁸ Visible a hojas 816 a 823 del expediente.

⁷⁹ Visible a hojas 922 a 924 del expediente.

⁸⁰ Visible a hojas 725 a 734 del expediente.

⁸¹ Visible a hoja 839 y anexo 840 del expediente.

⁸² Visible a hojas 790 a 796 del expediente.

⁸³ Visible a hojas 886 a 888 del expediente.

⁸⁴ Visible a hojas 890 a 894 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
José Ángel Zambrano López	INE/CHIS/10JDE/VS/283/2022 ⁸⁵	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	10/06/2022 Escrito ⁸⁶
Karina Obregón Alonso	INE/COAH/JDE04/VS/219/2022 ⁸⁷	Notificación: 16/06/2022 Plazo: del 17 al 23 de junio 2022.	Sin respuesta
Juan Ramón Eric García Guerrero	INE-JDE28-MEX/VS/115/2022 ⁸⁸	Notificación: 14/06/2022 Plazo: del 15 al 21 de junio 2022.	Sin respuesta
Heriberto Aragón Guevara	INE/VSD/104/2022 ⁸⁹	Notificación: 15/06/2022 Plazo: del 16 al 22 de junio 2022.	Sin respuesta
Jesús Andrade Fierro	INE/GRO/JDE03/VS/0148/2022 ⁹⁰	Notificación: 24/06/2022 Plazo: del 27 de junio al 01 de julio 2022.	Sin respuesta
Perla Paulina García Barrera	INE/JDE04-GRO/VS/0282/2022 ⁹¹	Notificación: 14/06/2022 Plazo: del 15 al 21 de junio 2022.	Sin respuesta
Alejandro Ayón Luna	INE-JAL-JDE01-VS-0661-2022 ⁹²	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	Sin respuesta
Reyna Griselda Navarro Mercado	INE-1C-8-00009-2022-VS-JDE07JAL ⁹³	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	Sin respuesta
Gilberto Espinoza Álvarez	INE/JAL/JDE08/VS/1091/2022 ⁹⁴	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	Sin respuesta
Gloria Jimena Montaña López	INE/MICH/JDE11/VS/379/2022 ⁹⁵	Notificación: 15/06/2022 Plazo: del 16 al 22 de junio 2022.	Sin respuesta
Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo	INE/ VS/JDE10/NL/0395/2022 ⁹⁶	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	Sin respuesta
Aurora María Olvera Méndez	INE/OAX/08JDE/VS/0337/2022 ⁹⁷	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta

⁸⁵ Visible a hojas 771 a 773 del expediente.

⁸⁶ Visible a hoja 774 y anexos 775 a 776 del expediente.

⁸⁷ Visible a hojas 898 a 905 del expediente.

⁸⁸ Visible a hojas 832 a 837 del expediente.

⁸⁹ Visible a hojas 865 a 876 del expediente.

⁹⁰ Visible a hojas 965 a 967 del expediente.

⁹¹ Visible a hojas 908 a 910 del expediente.

⁹² Visible a hojas 826 a 829 del expediente.

⁹³ Visible a hojas 736 a 739 del expediente.

⁹⁴ Visible a hojas 917 a 918 del expediente.

⁹⁵ Visible a hojas 854 a 858 del expediente.

⁹⁶ Visible a hojas 741 a 743 del expediente.

⁹⁷ Visible a hojas 878 a 883 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Denunciantes	Oficio	Plazo	Contestación a los Alegatos
Francisco López Alarcón	INE/TAM/05JDE/0799/2022 ⁹⁸	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	14/06/2022 Escrito ⁹⁹
Heriberto Rogel Martínez	INE/JD01-VER/1337/2022 ¹⁰⁰	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	14/06/2022 Escrito ¹⁰¹
Lidia Hernández Hernández	INE/JDE02-VER/2037/2022 ¹⁰²	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
Martha Patricia Ramírez Santamaría	INE/JD08-VER/1026/2022 ¹⁰³	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	Sin respuesta
José Antonio Caudillo Coral	INE/JDE03/VS-YUC/253/2022 ¹⁰⁴	Notificación: 10/06/2022 Plazo: del 13 al 17 de junio 2022.	Sin respuesta
Denunciado			20/06/2022 Escrito ¹⁰⁶
<i>PVEM</i>	INE-UT/05452/2022 ¹⁰⁵	Notificación: 13/06/2022 Plazo: del 14 al 20 de junio 2022.	

11. VISTA A DENUNCIANTES Y AL PVEM, ATRACCIÓN DE CONSTANCIAS, REQUERIMIENTO A LA DERFE, TOMA DE MUESTRAS PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL, SOLICITUD DE APOYO A LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO EN FUNCIÓN DE COORDINADORA DE LA OFICIALÍA ELECTORAL Y REQUERIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO¹⁰⁷ Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, la *UTCE* consideró necesario desahogar prueba pericial en grafoscopia, toda vez que **César Adrián Tovar Zamora y José Ángel Zambrano López**, en su respuesta a la vista formulada mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, y al dar contestación a la vista de alegatos, respectivamente, contrvirtieron de manera frontal y directa la documentación exhibida por el *PVEM*, al manifestar que niegan que la letra y firmas puestas en los documentos aportados por el partido denunciado sean de su puño y letra.

⁹⁸ Visible a hojas 765 a 769 del expediente.

⁹⁹ Visible a hojas 760 a 761 y anexos de 762 a 764 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a hojas 751 a 757 del expediente.

¹⁰¹ Visible a hojas 861 a 863 del expediente.

¹⁰² Visible a hojas 746 a 748 del expediente.

¹⁰³ Visible a hojas 779 a 789 del expediente.

¹⁰⁴ Visible a hojas 720 a 723 del expediente.

¹⁰⁵ Visible a hojas 711 a 517 del expediente.

¹⁰⁶ Visible a hojas 797 a 814 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a hojas 925 a 937 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

En virtud de ello se dio vista a dichos denunciantes y al *PVEM* para que, en un plazo improrrogable de **tres días hábiles**, adicionaran las preguntas que consideraran necesarias, respecto del cuestionario con el que se le corrió traslado y a efecto de que el quejoso aportara algunos documentos originales y se presentara en la Junta Distrital o Local más cercana a su domicilio, con el objeto de que funcionarios de dichos órganos, le tomaran las muestras de las firmas necesarias para el desahogo de la prueba pericial respectiva.

De igual forma, se agregaron al presente asunto, constancias del expediente UT/SCG/Q/MMPG/CG/215/2018, mismas que tienen relación con el desahogo de la prueba pericial referida

En el mismo proveído, se le requirió al titular de la *DERFE* para que proporcionara el tarjetón de firmas o los soportes documentales donde obre el histórico de firmas de los ciudadanos en cuestión.

Además, se solicitó el apoyo a la Directora del Secretariado en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, para que instruyera la presencia de funcionarios con atribuciones de Oficialía Electoral a efecto de que tomaran las muestras de firmas de **César Adrián Tovar Zamora y José Ángel Zambrano López**.

De igual forma, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral y al Director General del Registro Civil del estado de Jalisco, a efecto de que informaran si en sus archivos se encontraba el acta de defunción o algún dato que permitiera confirmar el fallecimiento de Gilberto Espinoza Álvarez, lo anterior, en virtud de que en la razón de notificación elaborada por personal de la 08 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, dirigida al referido ciudadano, asentaron la imposibilidad de la notificación del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, toda vez que al constituirse en el domicilio proporcionado, se informó que la persona buscada había fallecido.

Dicho acuerdo fue notificado y desahogado de la siguiente manera:

Denunciante	Oficio	Plazo	Contestación
César Adrián Tovar Zamora	INE/JDE03/AGS/VS/608/2022 ¹⁰⁸	Notificación: 15/07/2022 Plazo: del 18 al 20 de julio de 2022.	Sin respuesta Mediante correo electrónico de 21/07/2022, la Vocal Secretaria de la 03 Junta

¹⁰⁸ Visible a hojas 986 a 989 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Denunciante	Oficio	Plazo	Contestación
			Distrital Ejecutiva del INE en Aguascalientes informó que el ciudadano no presentó escrito alguno y no compareció a la toma de muestras. ¹⁰⁹
José Ángel Zambrano López	INE/CHIS/10JDE/VS/358/2022 ¹¹⁰	Notificación: 15/07/2022 Plazo: del 18 al 20 de julio de 2022.	Formato rellenado de toma de muestras del 15/07/2022 ¹¹¹
Denunciado	INE-UT/06545/2022 ¹¹²	Notificación: 14/07/2022 Plazo: del 15 al 19 de julio de 2022.	19/07/2022
<i>PVEM</i>			Oficio PVEM-INE-174-2022 ¹¹³

Sujeto requerido	Oficio	Respuesta
Directora del Secretariado	Se notificó a través del Sistema de Archivos Institucional ¹¹⁴	10/07/2022 Oficio INE/DS/1327/2022 ¹¹⁵
<i>DERFE</i>	Se notificó a través del Sistema de Archivos Institucional ¹¹⁶	11/08/2022 Oficio INE/DERFE/STN/18015/2022 ¹¹⁷ No localizaron los registros solicitados.
Director General del Registro Civil del estado de Jalisco	Oficio INE-JAL-JLE-VS-0407-2022 ¹¹⁸	DGARC/7711/2022 No encontraron registros de defunción de la persona señalada.

12. DESAHOGOS DE VISTA DE CUESTIONARIO Y SOLICITUD DE COLABORACIÓN AL TITULAR DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.¹¹⁹ Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al denunciado *PVEM*, dando cumplimiento al diverso proveído de doce de julio mismo año, a **José Ángel Zambrano López**, atendiéndolo parcialmente y a **César Adrián Tovar Zamora** omitiendo realizar manifestación alguna, respecto a la vista formulada y presentarse a la respectiva toma de muestras caligráficas, en los siguientes términos:

¹⁰⁹ Visible a hojas 981 a 983 del expediente.

¹¹⁰ Visible a hojas 970 a 973 del expediente.

¹¹¹ Visible a hojas 974 a 979 del expediente.

¹¹² Visible a hojas 961 a 963 del expediente.

¹¹³ Visible a hojas 981 a 983 del expediente.

¹¹⁴ Visible a hojas 950 a 951 del expediente.

¹¹⁵ Visible a hojas 956 a 960 del expediente.

¹¹⁶ Visible a hojas 1021 a 1022 del expediente.

¹¹⁷ Visible a hojas 992 a 997 y anexos de 998 a 1008 del expediente.

¹¹⁸ Visible a hojas 953 a 955 del expediente.

¹¹⁹ Visible a hojas 713 a 720 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Destinatario	Oficio-Fecha de notificación	Plazo:	Respuesta
José Ángel Zambrano López	INE/CHIS/10JDE/VS/358/2022 ¹²⁰ 15/07/2022	Del 18 al 20 de julio de 2022	Sin respuesta El 15 de julio de 2022, ocurrió la toma de muestras caligráficas. ¹²¹
César Adrián Tovar Zamora	INE/JDE03/AGS/VS/608/2022 ¹²² 15/07/2022	Del 18 al 20 de julio de 2022	No dio respuesta y no se presentó a la toma de muestras caligráficas.
PVEM	INE-UT/06545/2022 ¹²³ 14/07/2022	Del 15 al 19 de julio de 2022.	19/07/2022 Oficio PVEM-INE-174-2022 ¹²⁴ Propone adicionar las siguientes preguntas: a) ¿Si al paso del tiempo y la práctica es posible que una persona haya modificado en pequeños detalles la forma de su firma y letra? b) ¿La pericial fue comparada con las firmas y letra del año en que suscribió la cédula de afiliación? c) ¿Es posible que alguien pueda cambiar su firma con la expedición de nuevas credenciales? d) Los efectos de la prueba pericial del denunciante (tipos) e) En su caso, determinar si existe la misma fuerza empleada para plasmar las firmas precisadas en el numeral a) y b) anteriores. f) Precisar las características de los bolígrafos empleados en las firmas aludidas.

¹²⁰ Visible a hojas 970 a 973 del expediente.

¹²¹ Visible a hojas 974 a 979 del expediente.

¹²² Visible a hojas 986 a 989 del expediente.

¹²³ Visible a hojas 961 a 963 del expediente.

¹²⁴ Visible a hojas 981 a 983 del expediente.

13. NUEVA NOTIFICACIÓN ALEGATOS. Al pretender notificar el acuerdo de alegatos a Gilberto Espinoza Álvarez, se señaló que había fallecido, a partir de lo cual, se realizaron sendas diligencias de investigación con el propósito de corroborar tal hecho.

De la lectura a las respuestas brindadas por la *DERFE* y el Registro Civil del estado de Jalisco, se advirtió que no había algún documento público en el que se constatará la referida difusión.

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, con el propósito de salvaguardar los derechos procesales del denunciante, se dio nuevamente la vista de alegatos, a efecto de que, en el plazo legal, manifestara lo que a su derecho conviniera.

Al pretender notificar el acuerdo de veintitrés de septiembre, se tendió la diligencia con una familiar suya, quien expresó que el buscado no había fallecido, aduciendo una posible confusión con el deceso del padre del mismo.

Destinatario	Oficio	Plazo	Contestación
Gilberto Espinoza Álvarez	INE/JAL/JDE08/VS/1721/2022	Notificación: 28/09/2022 Plazo: del 29 de septiembre al 03 de octubre de 2022.	Sin respuesta

Toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

14. VISTA. Toda vez que mediante oficio 55346 signado por el perito en grafoscopia de la Fiscalía General de la República se recibió el dictamen pericial correspondiente a **José Ángel Zambrano López**, por acuerdos de trece y treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista con su contenido a las partes involucradas.

Siendo que únicamente el *PVEM* dio respuesta a la vista que le fue formulada.

15. VERIFICACIÓN DE NO REAFILIACIÓN. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, personal de la *UTCE*, ingresó al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la *DEPPP*, logrando advertir que la totalidad de personas denunciadas, siguen apareciendo con registro de militancia cancelado, sin que hubiera alguna nueva afiliación

16. ELABORACIÓN DE PROYECTO. Toda vez que no había diligencias pendientes por desahogar, se procedió a formular el presente proyecto de resolución, para ser sometido al conocimiento de la *Comisión de Quejas*.

17. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Tercera Sesión Extraditaria de carácter privada, celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión de Quejas analizó el Proyecto de Resolución del procedimiento sancionador ordinario al rubro identificado, en la cual determinó aprobarlo en lo general, por unanimidad de votos de sus integrantes y, en lo particular, por cuanto hace al resolutivo PRIMERO de esta resolución respecto de Francisco López Alarcón, por mayoría de dos votos de sus integrantes, con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), x), e y), de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del **PVEM**, en perjuicio de **José Ángel Zambrano López, Ana Rosa Figueroa Carrizales, César Adrián Tovar Zamora, Michelle Hiram Santiago Armenta, Brandon Esteban Martínez Villeda, María Concepción Córdova Méndez, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, Karina Obregón Alonso, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Alejandro Ayón Luna, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo,**

Aurora María Olvera Méndez, Francisco López Alarcón, Heriberto Rogel Martínez, Lidia Hernández Hernández, Martha Patricia Ramírez Santamaría y José Antonio Caudillo Coral.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Partidos, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), la *LGPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el Consejo General.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al Partido Verde Ecologista de México, derivado, esencialmente, por la transgresión al derecho de libre afiliación y utilización indebida de datos personales de los denunciantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*,¹²⁵ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de la ciudadanía a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.

¹²⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de la ciudadanía.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

SEGUNDO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- 2) **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3) La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la

conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.

4) Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrarán en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el **uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte**, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que, durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

las personas denunciantes en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados/as son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.

2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la *DEPPP* la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.

TERCERO. ESTUDIO DE FONDO

1. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

En el presente asunto se debe determinar si el *PVEM* vulneró el derecho de libre afiliación de **Ana Rosa Figueroa Carrizales, César Adrián Tovar Zamora, Michelle Hairam Santiago Armenta, Brandon Esteban Martínez Villeda, María Concepción Córdova Méndez, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, Karina Obregón Alonso, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Alejandro Ayón Luna, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo, Aurora María Olvera Méndez, Francisco López Alarcón, Heriberto Rogel Martínez, Lidia Hernández Hernández, Martha Patricia Ramírez Santamaría y José Antonio Caudillo Coral**, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), x) e y) de la *LGPP*.

2. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Al momento de dar respuesta al emplazamiento y en vía de alegatos, el denunciado hizo valer las siguientes excepciones y defensas:

- No existe afiliación indebida de los quejosos al *PVEM*, en razón de que es un derecho que se ejerce libremente cumpliendo el trámite correspondiente, en el caso, los quejosos de forma voluntaria presentaron fotocopia de la credencial de elector y llenaron la respectiva cédula de afiliación, por lo que la misma fue conforme a la normatividad electoral y a los estatutos de ese instituto político.
- Lo señalado en el punto que precede, se corrobora con la cédula de afiliación original y copia simple de la credencial de elector de **José Ángel Zambrano López, Ana Rosa Figueroa Carrizales, César Adrián Tovar Zamora, Brandon Esteban Martínez Villeda, María Concepción Córdova Méndez, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo, Francisco López Alarcón, Lidia Hernández Hernández y José Antonio Caudillo Coral**, así como con la impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de **Ana Rosa Figueroa Carrizales**, documentos que fueron presentados por el denunciado.
- *El PVEM* firmó el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración con el INE, con la finalidad de que el instituto, pusiera a disposición del partido político denunciado la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de sus afiliados.
- **Ana Rosa Figueroa Carrizales**, fue afiliada mediante aplicativo móvil, de tal forma que la impresión de la cédula digital, fue presentada a la autoridad sustanciadora, en la que se observan elementos mínimos que demuestran fehacientemente la debida afiliación de la ciudadana como son: nombre completo, clave de elector, fecha de afiliación, domicilio completo, la manifestación expresa de querer afiliarse y su firma, esto, con base en lo establecido en el Considerando 13 del Acuerdo INE/CG33/2020 y los Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político nacional, aprobados mediante el acuerdo INE/CG231/2019.

- La afiliación voluntaria de algunos quejosos fue en el año 2016, sin que en el periodo comprendido del 2016 al 2019 hayan presentado alguna queja por indebida afiliación, fue hasta 2020 cuando tuvieron la intención de aspirar al cargo de supervisores/as electorales y/o capacitadores/as para el proceso electoral 2020-2021.
- Los ciudadanos otorgaron su consentimiento para afiliarse al *PVEM*, toda vez que en los formatos de afiliación originales y en la cédula digital, se hace constar su voluntad expresa de afiliarse a dicho instituto político.
- Actualmente los quejosos no se encuentran registrados en el Padrón de afiliados del *PVEM*, lo anterior en atención a la voluntad manifestada por los mismos.
- No existe uso indebido de los datos personales de los quejosos, toda vez que ellos mismos los proporcionaron al afiliarse al *PVEM*, incluso en los mismos formatos de afiliación, se hace referencia al aviso de privacidad, los datos que les son requeridos son solo los necesarios para su debido registro, los cuales, son utilizados exclusivamente para los fines determinados por la legislación electoral y estatutaria correspondiente.
- El denunciado al haber presentado los formatos de afiliación originales, mediante los cuales demuestra que se otorgó el consentimiento expreso para la afiliación de los quejosos a ese instituto político y que claramente entregaron su identificación para ser fotocopias, siendo el motivo por el cual, se cuenta con sus datos personales.
- Invoca el principio de presunción de inocencia, toda vez que no existe prueba que demuestre plenamente la responsabilidad del *PVEM*, por lo cual, no es factible sustentar la infracción y la sanción que se le pretende aplicar.
- De resultar fundado el procedimiento que nos ocupa, la autoridad resolutora se encuentra obligada a individualizar la sanción tomando en cuenta que el *PVEM*, ha cumplido con el Acuerdo INE/CG33/2019 del *Consejo General*.

- Se debe considerar que los quejosos ya no se encuentran en el padrón de afiliados del *PVEM*, que dicho instituto político ha dado de baja inmediata a los ciudadanos que presentaron escrito de renuncia y a los que han presentado queja por indebida afiliación.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como al de rendir alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia razón por la cual, esta autoridad analizará integralmente los planteamientos expuestos por el denunciado, a la luz de las pruebas que obran en el expediente.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
...

Artículo 41.
...

I.
...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito,

mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de la ciudadanía para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹²⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que

¹²⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>.

únicamente la ciudadanía puede afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹²⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III de la *Constitución*, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a

¹²⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de la ciudadanía para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las y los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. *Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

1. *Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

a. *En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y*

b. *El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.*

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y

siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política e

incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LG/PE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renunciar a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar **si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro**, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de la ciudadanía, pues, como se señaló, tal derecho emana de la *Constitución*, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de la ciudadanía, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los soportes necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que la ciudadanía goce de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que las y los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de *PVEM*

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho

referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PVEM*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹²⁸

Estatutos del PVEM
CAPÍTULO II

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;

II.- Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y

III.- Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

¹²⁸ Consultable en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

I.- Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;

II.- Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;

III.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.

Los objetivos y actividades de los militantes, tienen como meta fundamental: forjar una sólida relación de identificación, de confianza y de credibilidad, con el electorado para hacer efectiva la alternativa de gobierno.

La calidad de militante solo puede ser restringida por incurrir en alguno de los supuestos previstos por el artículo 9, y en los capítulos XI y XII de este cuerpo normativo, previa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia o en su caso por la Comisión Estatal de Honor y Justicia las cuales deberán otorgar la garantía de audiencia y cubrir todas las formalidades establecidas en los presentes Estatutos.

...

Artículo 6.- *Podrán afiliarse al Partido las personas que estén ejerciendo algún puesto de elección popular postulados por otro Partido político, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, según sea el caso, solamente con el carácter de adherente, solicitando por escrito su afiliación al Comité Ejecutivo Estatal de su ámbito territorial, siempre y cuando presente renuncia por escrito al Partido que lo postuló. En el entendido, que la persona que se encuentre en este supuesto, solamente podrá tener el carácter de militante si reúne lo señalado en los presentes Estatutos.*

...

Artículo 69.- *Facultades del Comité Ejecutivo Estatal y del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas:*

Estará coordinado por el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, quien será electo por el Consejo Político Estatal de entre uno de sus integrantes.

I.- Administrar los padrones Estatales de adherentes y simpatizantes respectivamente, en la entidad federativa correspondiente;

II.- Registrar a los afiliados que tengan el carácter de adherentes y simpatizantes en el padrón Estatal que corresponda;

...

CAPÍTULO XVIII
Del Registro de Afiliación

Artículo 87.- *El presente capítulo tiene como finalidad regular los procesos de afiliación y participación de los militantes, adherentes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional.*

Artículo 88.- *El proceso de afiliación es responsabilidad del Consejo Político Nacional, que tiene la obligación de llevarlo a cabo con apego a la normatividad respectiva.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Artículo 89.- La administración del proceso de afiliación en materia de captura y expedición de constancias se delegará parcialmente a los Comités Ejecutivos Estatales y del Distrito Federal.

El formato para la credencial de militante y constancia de adherente será único a nivel nacional y será determinado por el Comité Ejecutivo Nacional.

La credencial de militante tendrá una vigencia máxima de doce meses y deberá refrendarse en todos los casos a más tardar en el mes de febrero de cada año, ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente con la aprobación del Consejo Político Nacional. El procedimiento de refrendo de credenciales estará condicionado a que el militante se encuentre al corriente en el pago de sus cuotas de aportación.

Las credenciales de militante contendrán sin excepción la firma autógrafa del Secretario Técnico y del Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación de la emisión por el Consejo Político Nacional.

Artículo 90.- El Consejo Político Nacional tomará las medidas pertinentes, para garantizar la adecuada prestación del servicio de afiliación e implementará los mecanismos expeditos para el adecuado desarrollo del proceso.

Artículo 91.- De la afiliación de los Militantes; Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:

I.- Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;

II.- Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y

III.- Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.

Artículo 93.- El Comité Ejecutivo Estatal que reciba la solicitud de afiliación como militante, entregará al interesado el comprobante correspondiente que será la garantía de su trámite, procediendo a estudiar la solicitud, y en su caso enviarla al Consejo Político Nacional, para su dictaminación.

Artículo 94.- El Consejo Político Nacional podrá rechazar cualquier trámite de afiliación como militante, cuando éste implique manipulación interesada, o sea producto de presión, compromiso hacia terceros o promesa de beneficio personal, así como cuando el interesado haya incurrido en cualquiera de los supuestos contenidos en el capítulo XI, De las Sanciones, de los presentes Estatutos.

Artículo 95.- El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente rechazará las solicitudes cuando:

I.- El solicitante no reúna los requisitos establecidos en los Estatutos; o

II.- Demuestre que el solicitante ha incurrido en actos de indisciplina o conductas contrarias a los principios del Partido durante el tiempo de su adherencia.

Artículo 96.- El Consejo Político Nacional como órgano superior en materia de afiliación, podrá revocar las propuestas de los Comités Ejecutivos Estatales, por incumplimiento a lo señalado en los presentes Estatutos.

...

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Artículo 103.- Todos los adherentes tendrán una constancia que acredite su afiliación al Partido.

La constancia de adherente será expedida por el Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión del propio Comité.

Artículo 104.- El registro de los simpatizantes se realizará en las sedes de los Comités Ejecutivos Estatales, comprendiendo por estos a los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.

Artículo 105.- De conformidad con lo previsto por el artículo 7, base segunda fracciones III y XIII, de los presentes Estatutos, todos los militantes deberán ratificar su militancia en el proceso que para tal efecto convocará en todo el país el Consejo Político Nacional, lo anterior en el entendido de que de no hacerlo dejarán de tener la calidad de militantes y se les considerará como inicio en la etapa de adherentes. Para poder participar en el proceso de ratificación de militancia se deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de militante.

**REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
ARCHIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Artículo 9. Toda la información en posesión del Partido que éste genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier título es pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá clasificarse como “temporalmente reservada” y “confidencial”.

Como información temporalmente reservada podrá clasificarse aquella cuya divulgación represente un riesgo de perjuicio significativo al interés público; que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas internas o en procesos electorales federales y locales; influyan en la organización del proceso electoral en contravención con la normatividad electoral aplicable; o las demás previstas en la Ley de Transparencia.

Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Dicha información no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los organismos internos del Partido facultados para ello. Se considera como información confidencial la contenida en el artículo 116 de la Ley de Transparencia. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los organismos internos del Partido, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

...

TÍTULO CUARTO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 21. Se adoptarán las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Asimismo, el Partido no podrá difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en sus sistemas, a menos que haya mediado consentimiento del titular y que sea acorde a las finalidades del instituto político.

Artículo 22. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “padrón de afiliados (simpatizantes, adherentes y militantes) del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Partido Verde Ecologista de México". Cuya finalidad es crear el banco de datos de Afiliados a este Instituto Político y serán resguardados por el Consejo Político Nacional del Partido, para su custodia, administración, actualización y ejecución de todo lo relativo al padrón de afiliados.

El Secretario, es la instancia donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento. Asimismo, no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales cuando: se transfieran entre órganos y entidades del Partido; sean necesarios para cuestiones estadísticas, científicas o de interés general; y cuando se contrate la prestación de un servicio que los requiera. Lo anterior, siempre y cuando dichos datos se utilicen para el ejercicio de las facultades y propósitos del Partido de conformidad con la Ley de Partidos o cuando medie orden judicial.

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el Acuerdo registrado con la clave *INE/CG33/2019*, por el cual se aprobó *"la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales"* ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado, el cual, en lo que interesa, estableció:

Acuerdo INE/CG33/2019
CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

...

12. Procedimiento de revisión y actualización y modernización de los Padrones de afiliadas y afiliados.

...

4. Consolidación de padrones.

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

A partir del sexto día hábil del mes de enero de dos mil veinte y hasta el último día de ese mes, los PPN notificarán a la DEPPP respecto de la cancelación de datos en el sistema de cómputo de todos aquellos registros que permanecieron en el estatus de reserva y de los cuales no informaron, ni acreditaron poseer el documento que prueba la afiliación o ratificación de la misma. En caso contrario, el último día de enero de dos mil veinte, la DEPPP requerirá a los PPN para que informen del estatus señalado, apercibiendo a los PPN que, de ser omisos en la respuesta, sabedores de las consecuencias

A C U E R D O

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

...

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

...
los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer
...

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PVEM* podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad

nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este *Consejo General* emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.
- En la referida determinación, se instruyó a los partidos políticos que, de manera inmediata, dieran de baja definitiva de su padrón de militantes, los datos de aquellas personas que, anterior a la emisión del Acuerdo aludido, hayan presentado queja por indebida afiliación o por renuncia que no hubieran tramitado.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como militante de un partido político, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, **por regla general, los partidos políticos — El PVEM, en el caso en particular—, tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que las ciudadanas en cuestión acudieron a solicitar su afiliación y que las mismas fueron libres y voluntarias**, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias

atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIDE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**,¹²⁹ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹³⁰ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹³¹ y como estándar probatorio.¹³²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

¹²⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹³⁰ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹³¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹³² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹³³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida, que para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por las personas denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de las personas quejosas verse sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad de la persona en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con

¹³³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

fundamento en el diverso 441, de la *LGPE*, lo que implica, que la persona quejosa tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en la queja que dio lugar al procedimiento ordinario sancionador la persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y**, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que **no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta

viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo un ciudadano previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberadamente la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que

ofrezcan o que se allegue la *UTCE* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

*1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*

*2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

*3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**¹³⁴ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio,**

¹³⁴ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**¹³⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**¹³⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**¹³⁷

¹³⁵ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

¹³⁶ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

¹³⁷ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**¹³⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹³⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹⁴⁰

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹⁴¹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*

[Énfasis añadido]

¹³⁸ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

¹³⁹ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

¹⁴⁰ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

¹⁴¹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,¹⁴² sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

¹⁴² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

5. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por las personas quejasas, versan sobre la supuesta transgresión a su derecho de libertad de afiliación en sus modalidades positiva —indebida afiliación—, al ser incorporadas en el padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar y continuar con tales afiliaciones.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de la denuncia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

José Ángel Zambrano López		
Escrito de queja ¹⁴³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁴⁴	Manifestaciones del Partido Político ¹⁴⁵
30/11/2020	Afiliado 20/04/2019 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de José Ángel Zambrano López.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p> <p>Al desahogar la vista que le fue formulada con el dictamen pericial, refirió que la afiliación fue voluntaria, que no existe uso indebido de datos personales, que la objeción del quejoso ocurrió fuera del momento procesal oportuno y que el dictamen pericial no otorga certeza a la materia de la litis.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> No existe controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>; El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria la cédula de afiliación en la que se aprecia, entre otros elementos, la firma autógrafa, al parecer, puesta del puño y letra del quejoso. 		

¹⁴³ Visible a hojas 61 a 62 del expediente.

¹⁴⁴ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁴⁵ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 299 y anexos de 310 a 311 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

José Ángel Zambrano López		
Escrito de queja ¹⁴³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁴⁴	Manifestaciones del Partido Político ¹⁴⁵
<ul style="list-style-type: none"> El ciudadano objetó la autenticidad del documento base del denunciado, aportando las pruebas de contraste que estimó conducentes, para el caso de desahogar la prueba pericial en grafoscopia respectiva; El quejoso compareció ante el órgano delegacional respectivo a desahogar las muestras caligráficas que fueron solicitadas por el experto en grafoscopia. La DERFE aportó el histórico de firmas de dicha persona. Con la documentación referida, se solicitó la intervención del perito en materia grafoscopia, quien informó lo siguiente: <p><i>ÚNICA.- No tiene el mismo origen gráfico la forma que aparece suscribiendo sobre la línea "FIRMA" en el documento que se lee "FORMATO" CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019", a nombre de "JOSÉ ÁGEL ZAMBRANO LÓPEZ", con número de foliode fecha 20/04/2019, tomando en relación, las firmas señaladas como base de cotejo a nombre del SR. "JOSÉ ÁNGEL ZAMBRANO LÓPEZ", lo anterior debido a las razones de índole técnico que se aluden en el cuerpo del presente</i></p> <p>Debido a lo anterior, tenemos que:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los documentos que sirvieron de base para el cotejo fueron firmados por el denunciante; El perito en grafoscopia señaló que la cédula de afiliación y los documentos base de cotejo fueron signados por personas distintas. La cédula de afiliación no fue signada por el denunciante. <p>Por tanto, la conclusión debe ser que se trata de una afiliación indebida.</p>		

Ana Rosa Figueroa Carrizales		
Escrito de queja ¹⁴⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁴⁷	Manifestaciones del Partido Político ¹⁴⁸
27/11/2020	<p>Afiliada 16/10/2019</p> <p>Registro cancelado 16/12/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Ana Rosa Figueroa Carrizales.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el PVEM exhibió impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de la quejosa.</p>

¹⁴⁶ Visible a hojas 01 a 02 del expediente.

¹⁴⁷ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁴⁸ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 455 a 457 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Ana Rosa Figueroa Carrizales		
Escrito de queja ¹⁴⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁴⁷	Manifestaciones del Partido Político ¹⁴⁸
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación de la quejosa, que la <i>DERFE</i> confirmó que dicha afiliación fue mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, que en el referido documento se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

César Adrián Tovar Zamora		
Escrito de queja ¹⁴⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁰	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵¹
01/12/2020	<p>Afiliado 25/09/2016</p> <p>Registro cancelado 16/12/2020</p>	<p style="text-align: center;">Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de César Adrián Tovar Zamora.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> No existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>; El partido denunciado aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar; El quejoso objetó la autenticidad de la cédula de afiliación; A partir de lo anterior, la <i>UTCE</i> consideró realizar la prueba pericial en grafoscopia, sin embargo, el quejoso omitió desahogar la vista formulada mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, en el sentido de adicionar preguntas al cuestionario con el cual se le corrió traslado, aportar documentos originales y comparecer a la toma de muestras de firmas, por lo cual, mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por desierta la pericial en materia de grafoscopia; <p>Debido a lo anterior y toda vez que las simples objeciones no son suficientes para desvirtuar la legalidad de los formatos de afiliación exhibidos por el <i>PVEM</i>, debe prevalecer la presunción de inocencia del denunciado,</p>		

¹⁴⁹ Visible a hojas 08 a 09 del expediente.

¹⁵⁰ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁵¹ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 357 y anexos de 360 a 361 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

César Adrián Tovar Zamora		
Escrito de queja ¹⁴⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁰	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵¹
por lo que la conclusión debe ser que la afiliación del ciudadano se realizó conforme las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Michelle Hiram Santiago Armenta		
Escrito de queja ¹⁵² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵³	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵⁴
01/12/2020	Afiliada 10/05/2017 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Michelle Hiram Santiago Armenta. El PVEM, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del PVEM. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

Brandon Esteban Martínez Villeda		
Escrito de queja ¹⁵⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵⁷
27/11/2020	Afiliado 31/07/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliado Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Brandon Esteban Martínez Villeda.

¹⁵² Visible a hojas 15 a 16 del expediente.

¹⁵³ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁵⁴ Oficios visibles a hojas 234 a 236 del expediente.

¹⁵⁵ Visible a hojas 24 a 25 del expediente.

¹⁵⁶ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁵⁷ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y anexos de 286 a 287 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Brandon Esteban Martínez Villeda		
Escrito de queja ¹⁵⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁵⁷
		Para acreditar la debida afiliación, el PVEM exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

María Concepción Córdova Méndez		
Escrito de queja ¹⁵⁸ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁹	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁰
27/11/2020	Afiliada 30/11/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de María Concepción Córdova Méndez. Para acreditar la debida afiliación, el PVEM exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.

¹⁵⁸ Visible a hojas 32 a 33 del expediente.

¹⁵⁹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁶⁰ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 285 y anexos de 288 a 289 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

María Concepción Córdova Méndez		
Escrito de queja ¹⁵⁸ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁵⁹	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁰
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa.</p> <p>La persona quejosa realizó manifestaciones en relación con esa cédula sin que dicha objeción fuera realizada en los términos del artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, no obstante que en el acuerdo mediante el cual se le dio vista, también se le expuso el contenido de este.</p> <p>A partir de lo anterior, se considera que la referida cédula no fue controvertida de manera frontal por la persona denunciante, ya que además no ofreció o aportó medios de prueba para corroborar sus afirmaciones.</p> <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>		

Karina Ivón López Mayo		
Escrito de queja ¹⁶¹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶²	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶³
27/11/2020	<p>Afiliada 11/10/2019</p> <p>Registro cancelado 20/11/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Karina Ivón López Mayo.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando en se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

¹⁶¹ Visible a hojas 39 a 40 del expediente.

¹⁶² Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁶³ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 299 y anexos de 304 a 305 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Sandra Cruz Reynoso García		
Escrito de queja ¹⁶⁴ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶⁵	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁶
26/11/2020	Afiliada 14/10/2019 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Sandra Cruz Reynoso García.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Mirza Elizabeth Velázquez Gómez		
Escrito de queja ¹⁶⁷ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶⁸	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁹
24/11/2020	Afiliada 17/10/2019 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Mirza Elizabeth Velázquez Gómez.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>

¹⁶⁴ Visible a hojas 45 a 46 del expediente.

¹⁶⁵ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁶⁶ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 299 y anexos de 306 a 307 del expediente.

¹⁶⁷ Visible a hojas 52 a 53 del expediente.

¹⁶⁸ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁶⁹ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 299 y anexos 308 a 309 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Mirza Elizabeth Velázquez Gómez		
Escrito de queja ¹⁶⁷ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁶⁸	Manifestaciones del Partido Político ¹⁶⁹
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Karina Obregón Alonso		
Escrito de queja ¹⁷⁰ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷¹	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷²
27/11/2020	<p>Afiliada 20/10/2016</p> <p>Registro cancelado 16/12/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Karina Obregón Alonso.</p> <p>El <i>PVEM</i>, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.</p>
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

Juan Ramón Eric García Guerrero		
Escrito de queja ¹⁷³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁴	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁵
30/11/2020	<p>Afiliado 09/04/2019</p>	Fue afiliado

¹⁷⁰ Visible a hojas 70 a 71 del expediente.

¹⁷¹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁷² Oficios visibles a hojas 234 a 236 del expediente.

¹⁷³ Visible a hojas 87 a 88 del expediente.

¹⁷⁴ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁷⁵ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y anexos de 300 a 301 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Juan Ramón Eric García Guerrero		
Escrito de queja ¹⁷³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁴	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁵
	Registro cancelado 16/12/2020	<p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Juan Ramón Eric García Guerrero.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Heriberto Aragón Guevara		
Escrito de queja ¹⁷⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁷	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁸
02/12/2020	<p>Afiliado 28/02/2020</p> <p>Registro cancelado 16/12/2020</p>	<p style="text-align: center;">Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Heriberto Aragón Guevara.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran</p>		

¹⁷⁶ Visible a hojas 77 a 78 del expediente.

¹⁷⁷ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁷⁸ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 398 y anexos de 399 a 400 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Heriberto Aragón Guevara		
Escrito de queja ¹⁷⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁷⁷	Manifestaciones del Partido Político ¹⁷⁸
dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Jesús Andrade Fierro		
Escrito de queja ¹⁷⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁸⁰	Manifestaciones del Partido Político ¹⁸¹
27/11/2020	Afiliado 13/09/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliado Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Jesús Andrade Fierro. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones		
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i> , que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando en se le corrió traslado con ese documento se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Perla Paulina García Barrera		
Escrito de queja ¹⁸² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁸³	Manifestaciones del Partido Político ¹⁸⁴
27/11/2020	Afiliada 05/10/2019	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.

¹⁷⁹ Visible a hojas 92 a 94 del expediente.

¹⁸⁰ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁸¹ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 398 y anexos de 403 a 405 del expediente.

¹⁸² Visible a hojas 101 a 102 del expediente.

¹⁸³ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁸⁴ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 248 y anexos de 406 a 407 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Perla Paulina García Barrera		
Escrito de queja ¹⁸² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁸³	Manifestaciones del Partido Político ¹⁸⁴
	Registro cancelado 16/12/2020	De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Perla Paulina García Barrera. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria <u>el original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Alejandro Ayón Luna		
Escrito de queja ¹⁸⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁸⁶	Manifestaciones del Partido Político ¹⁸⁷
		Fue afiliado
02/12/2020	Afiliado 09/10/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Alejandro Ayón Luna. El <i>PVEM</i> , no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación del quejoso.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue registrado como afiliado del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que SÍ se trata de una afiliación indebida.</p>		

¹⁸⁵ Visible a hojas 109 a 110 del expediente.

¹⁸⁶ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁸⁷ Oficios visibles a hojas 234 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Reyna Griselda Navarro Mercado		
Escrito de queja ¹⁸⁸ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁸⁹	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁰
01/12/2020	Afiliada 14/02/2020 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Reyna Griselda Navarro Mercado.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria <u>el original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Gilberto Espinoza Álvarez		
Escrito de queja ¹⁹¹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁹²	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹³
01/12/2020	Afiliado 10/02/2020 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Gilberto Espinoza Álvarez.</p> <p>El <i>PVEM</i>, aportó la cédula original para acreditar la legal afiliación del quejoso.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó</p>		

¹⁸⁸ Visible a hojas 117 a 118 del expediente.

¹⁸⁹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁹⁰ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y anexos de 292 a 293 del expediente.

¹⁹¹ Visible a hoja 125 del expediente.

¹⁹² Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁹³ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y anexos de 290 a 291 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Gilberto Espinoza Álvarez		
Escrito de queja ¹⁹¹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁹²	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹³
como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Gloria Jimena Montaña López		
Escrito de queja ¹⁹⁴ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁹⁵	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁶
30/11/2020	Afiliada 03/11/2016 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Gloria Jimena Montaña López. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
Conclusiones		
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i> , que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo		
Escrito de queja ¹⁹⁷ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ¹⁹⁸	Manifestaciones del Partido Político ¹⁹⁹
30/11/2020	Afiliada 02/08/2019	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.

¹⁹⁴ Visible a hojas 130 a 131 del expediente.

¹⁹⁵ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁹⁶ Oficios visibles a hojas 234 as 236 y 299 y anexos de 302 a 303 del expediente.

¹⁹⁷ Visible a hojas 138 a 139 del expediente.

¹⁹⁸ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

¹⁹⁹ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 629 a 631 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo		
Escrito de queja¹⁹⁷ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP¹⁹⁸	Manifestaciones del Partido Político¹⁹⁹
	Registro cancelado 16/12/2020	De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria <u>el original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>		

Aurora María Olvera Méndez		
Escrito de queja²⁰⁰ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP²⁰¹	Manifestaciones del Partido Político²⁰²
30/11/2020	Afiliada 10/09/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Aurora María Olvera Méndez. El <i>PVEM</i> , no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>		

²⁰⁰ Visible a hoja 147 del expediente.

²⁰¹ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²⁰² Oficios visibles a hojas 234 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Francisco López Alarcón		
Escrito de queja ²⁰³ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ²⁰⁴	Manifestaciones del Partido Político ²⁰⁵
27/11/2020	Afiliado 28/02/2020 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Francisco López Alarcón.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el PVEM exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa.</p> <p>Al momento de atender la vista de alegatos la persona quejosa realizó manifestaciones en relación con esa cédula sin que dicha objeción fuera realizada en los términos del artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>, no obstante que en el acuerdo mediante el cual se le dio vista, también se le expuso el contenido de este.</p> <p>A partir de lo anterior, se considera que la referida cédula no fue controvertida de manera frontal por la persona denunciante, ya que además no ofreció o aportó medios de prueba para corroborar sus afirmaciones.</p> <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que NO se trata de una afiliación indebida.</p>		

Heriberto Rogel Martínez		
Escrito de queja ²⁰⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ²⁰⁷	Manifestaciones del Partido Político ²⁰⁸
30/11/2020	Afiliado 02/11/2016 Registro cancelado 16/12/2020	<p>Fue afiliado</p> <p>Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Heriberto Rogel Martínez.</p>

²⁰³ Visible a hojas 153 a 154 del expediente.

²⁰⁴ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²⁰⁵ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 618 a 620 del expediente.

²⁰⁶ Visible a hojas 161 a 162 del expediente.

²⁰⁷ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²⁰⁸ Oficio visible a hojas 234 a 236 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Heriberto Rogel Martínez		
Escrito de queja ²⁰⁶ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ²⁰⁷	Manifestaciones del Partido Político ²⁰⁸
		El PVEM, no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación del quejoso.
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que el denunciante fue registrado como afiliado del PVEM. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>		

Lidia Hernández Hernández		
Escrito de queja ²⁰⁹ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP ²¹⁰	Manifestaciones del Partido Político ²¹¹
01/12/2020	<p>Afiliada 29/09/2016</p> <p>Registro cancelado 16/12/2020</p>	<p>Fue afiliada</p> <p>Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>De igual forma, el PVEM informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Lidia Hernández Hernández.</p> <p>Para acreditar la debida afiliación, el PVEM exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PVEM en atención a lo informado por la DEPPP y el denunciado. 2. El PVEM aportó el original del formato de afiliación con los datos y firma de la persona denunciante, de 04 de octubre de 2016, sin embargo, la fecha de afiliación señalada por el PVEM y la DEPPP es 29 de septiembre de 2016, esto es, dos fechas distintas entre sí, razón por la que, el documento exhibido por el partido político denunciado no desvirtúa la afiliación indebida que se le atribuye. <p>Es por lo que, la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>		

²⁰⁹ Visible a hojas 171 a 172 del expediente.

²¹⁰ Correo electrónico institucional de la DEPPP, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²¹¹ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 357 y anexos de 358 a 359 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Martha Patricia Ramírez Santamaría		
Escrito de queja²¹² (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP²¹³	Manifestaciones del Partido Político²¹⁴
30/11/2020	Afiliada 10/10/2016 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliada Informó que el registro de la ciudadana presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Martha Patricia Ramírez Santamaría. El <i>PVEM</i> , no aportó documento alguno para acreditar la legal afiliación de la quejosa.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que no existe controversia en el sentido de que la denunciante fue registrada como afiliada del <i>PVEM</i>. Sin embargo, es importante referir que el citado instituto político no aportó elementos para acreditar que la afiliación fue voluntaria, tales como la solicitud de registro de militante o, en su caso, la cédula de afiliación respectiva.</p> <p>Es por ello que la conclusión debe ser que Sí se trata de una afiliación indebida.</p>		

José Antonio Caudillo Coral		
Escrito de queja²¹⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la DEPPP²¹⁶	Manifestaciones del Partido Político²¹⁷
01/12/2020	Afiliado 04/10/2019 Registro cancelado 16/12/2020	Fue afiliado Informó que el registro del ciudadano presentaba un estatus de cancelado en el padrón de afiliados del partido político. De igual forma, el <i>PVEM</i> informó la fecha de alta y de cancelación del registro de Francisco López Alarcón. Para acreditar la debida afiliación, el <i>PVEM</i> exhibió el original de la cédula de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar.
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que el denunciante apareció registrado como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó</p>		

²¹² Visible a hojas 179 a 180 del expediente.

²¹³ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²¹⁴ Oficio visible a hojas 234 a 236 del expediente.

²¹⁵ Visible a hojas 187 a 188 del expediente.

²¹⁶ Correo electrónico institucional de la *DEPPP*, visible a hojas 231 a 233 del expediente.

²¹⁷ Oficios visibles a hojas 234 a 236 y 398 y anexos de 401 a 402 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

José Antonio Caudillo Coral		
Escrito de queja ²¹⁵ (Recepción en UTCE)	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i> ²¹⁶	Manifestaciones del Partido Político ²¹⁷
como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa y copia de la credencial para votar y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio aún y cuando se le corrió traslado con ese documento, se debe concluir que la citada afiliación se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias aplicables.		

Las constancias aportadas por la *DEPPP* y *DERFE*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado y las y los denunciantes, así como la pericial, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracciones II y IV del *Reglamento Quejas* por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

6. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejasas, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier

persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía -respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político- no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la persona quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las personas quejasas para afiliarles a su partido político, y no a las personas que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a *PVEM*, en tanto que el dicho de las personas quejasas consiste en demostrar que no dieron su consentimiento para ser afiliadas, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de conformidad con lo sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado por la *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, en la que estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

En ese contexto, para determinar si el *PVEM* incurrió o no en una posible transgresión al derecho de libre afiliación del quejoso, en sus vertientes positiva y negativa, el análisis correspondiente se realizará en tres apartados:

APARTADO A.
**AFILIACIONES QUE, A JUICIO DE ESTA AUTORIDAD, NO EXISTEN ELEMENTOS PARA
ACREDITAR QUE FUERAN INDEBIDAS**

1. Supuestos en los que se presentaron cédulas de afiliación y no fueron objetadas.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que **Ana Rosa Figueroa Carrizales, Brandon Esteban Martínez Villeda, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo y José Antonio Caudillo Coral**, fueron personas afiliadas al *PVEM*.

Por otra parte, el *PVEM* demuestra con medios de prueba, que las afiliaciones respectivas son el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las personas quejasas, en las cuales, las mismas, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo sus afiliaciones a dicho instituto político.

Luego entonces, toda vez que estas partes denunciantes manifestaron no haber otorgado su consentimiento para ser agremiadas al partido; que está comprobada su afiliación de éste, y que el *PVEM*, cumplió su carga para demostrar que la afiliación sí se realizó voluntariamente, **esta autoridad electoral considera que no existe una vulneración al derecho de afiliación de las partes quejasas.**

En efecto, a partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que las afiliaciones de **Ana Rosa Figueroa Carrizales, Brandon Esteban Martínez Villeda, Karina Ivón López Mayo, Sandra Cruz Reynoso García, Mirza Elizabeth Velázquez Gómez, Juan Ramón Eric García Guerrero, Heriberto Aragón Guevara, Jesús Andrade Fierro, Perla Paulina García Barrera, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez, Gloria Jimena Montaña López, Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo y José Antonio Caudillo Coral**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, el *PVEM* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas *PVEM* ofreció como medios de prueba los originales de las **cédulas de afiliación** de las personas denunciantes, salvo en el caso de **Ana Rosa Figueroa Carrizales**, en donde el denunciado exhibió impresión de la cédula del expediente electrónico de afiliación, obtenida mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, **con las cuales se corrió traslado a las mismas y éstas no realizaron objeción alguna**, por lo cual se considera que dichos medios de convicción, al valorarlos en lo individual con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones controvertidas.

De este modo, esta autoridad resolutoria engarzó una cadena de indicios a partir de diversos hechos que en la especie se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes, la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) los formatos de afiliación de las personas antes precisadas, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad de estas y; iii) la falta de objeción de esos formatos.

En efecto, con la finalidad de respetar el derecho de audiencia de las personas quejasas involucradas, la autoridad instructora, les corrió traslado con la impresión de las cédulas de afiliación que aportó el *PVEM* a las referidas personas denunciantes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con dicha probanza, sin que hubiera respuesta alguna por parte de éstas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

No.	Denunciante	Fecha del acuerdo en el que se ordenó correr traslado con las cédulas de afiliación.	Notificación	Respuesta
1	Ana Rosa Figueroa Carrizales	07/07/2021	15/07/2021 ²¹⁸	No hubo
2	Brandon Esteban Martínez Villeda	25/03/2021	12/04/2021 ²¹⁹	No hubo
3	Karina Ivón López Mayo	25/03/2021	01/04/2021 ²²⁰	No hubo
4	Sandra Cruz Reynoso García	25/03/2021	23/04/2021 ²²¹	No hubo
5	Mirza Elizabeth Velázquez Gómez	25/03/2021	30/03/2021 ²²²	No hubo
6	Juan Ramón Eric García Guerrero	25/03/2021	01/04/2021 ²²³	No hubo
7	Heriberto Aragón Guevara	25/03/2021	13/04/2021 ²²⁴	No hubo
8	Jesús Andrade Fierro	25/03/2021	06/04/2021 ²²⁵	No hubo
9	Perla Paulina García Barrera	25/03/2021	31/03/2021 ²²⁶	No hubo
10	Reyna Griselda Navarro Mercado	25/03/2021	30/03/2021 ²²⁷	No hubo
11	Gilberto Espinoza Álvarez	25/03/2021	30/03/2021 ²²⁸	No hubo
12	Gloria Jimena Montaña López	25/03/2021	31/03/2021 ²²⁹	No hubo
13	Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo	14/01/2022	21/01/2022 ²³⁰	No hubo
14	José Antonio Caudillo Coral	25/03/2021	01/04/2021 ²³¹	No hubo

En este sentido, las personas denunciantes fueron omisas en responder a la vista que les fue formulada, según se describió párrafos arriba, aún y cuando se le corrió traslado con esas documentales; por lo que hicieron nulo su derecho de realizar las manifestaciones que estimara pertinentes y, en su caso, de desvirtuar los medios de prueba exhibidos.

En efecto, de lo antes referido, es posible advertir de las constancias de autos que, no obstante que las partes quejosas tuvieron la oportunidad procesal de objetar la autenticidad y contenido de las respectivas cédulas de afiliación, **se abstuvieron de cuestionarla**, pues no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación

²¹⁸ Visible a hojas 604 a 606 del expediente.

²¹⁹ Visible a hojas 528 a 530 del expediente.

²²⁰ Visible a hojas 472 a 477 y 552 a 554 del expediente.

²²¹ Visible a hojas 582 a 584 del expediente.

²²² Visible a hojas 511 a 514 del expediente.

²²³ Visible a hojas 521 a 526 del expediente.

²²⁴ Visible a hojas 534 a 540 del expediente.

²²⁵ Visible a hojas 577 a 580 del expediente.

²²⁶ Visible a hojas 459 a 461, 480 a 481 y 587 a 589 del expediente.

²²⁷ Visible a hojas 516 a 519 del expediente.

²²⁸ Visible a hojas 497 a 509 del expediente.

²²⁹ Visible a hojas 483 a 488 del expediente.

²³⁰ Visible a hojas 649 a 651 del expediente.

²³¹ Visible a hojas 567 a 569 del expediente.

alguna en ese sentido, de lo que se puede colegir que existe un reconocimiento tácito de estos de haber suscrito y firmado esos documentos, lo que de suyo permite colegir que existió su voluntad para ser afiliadas al partido denunciado.

En este tenor, este órgano que resuelve considera que **el partido político sí cumplió con la carga probatoria** que le correspondía a su afirmación, en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las partes quejas, toda vez que, sí exhibió prueba suficiente sobre la legitimidad de las afiliaciones motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Es decir, acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de las denunciantes de incorporarse como militantes de ese partido político, y para ello suscribieron y firmaron los respectivos formatos de afiliación que, al efecto ofreció dicho denunciado, por lo que, es válido colegir que sí realizó las afiliaciones de las partes quejas de conformidad con sus procedimientos internos.

Finalmente, respecto a este apartado, y a las cédulas de afiliación aportadas por el *PVEM* en relación con **Brandon Esteban Martínez Villeda, Reyna Griselda Navarro Mercado, Gilberto Espinoza Álvarez y Gloria Jimena Montaña López**, se advierte que en dichos documentos no se precisan las fechas en las cuales las personas denunciantes fueron incorporadas al partido denunciado; no obstante, a juicio de este órgano resolutor, dicha circunstancia no es un impedimento para tener por acreditada la debida afiliación de la quejosa.

Lo anterior porque cuentan con firma que presuntamente corresponde con la de las personas denunciantes, así como datos que resultan coincidentes con dichas personas, los cuales, no fueron objetados por las quejas, a pesar de haber tenido la oportunidad procesal de controvertir dicha cédula, no lo hicieron, lo cual conduce a esta autoridad a la conclusión de que las cédulas aportadas por el denunciado deben tenerse como suficiente para acreditar la legalidad de la afiliación de las personas denunciantes.

Se precisa que, por lo que respecta a **Gloria Jimena Montaña López**, al revisar la cédula correspondiente, se advierte que en el apartado donde debería ir la fecha se insertó una etiqueta con un código de barras por lo que no se tiene certeza sobre si dicho documento en algún momento contó con fecha. No obstante, como se precisó en las líneas que anteceden la falta de una fecha visible, no representa un impedimento para considerar la idoneidad de dicho documento para acreditar la

voluntad de la quejosa de ser militante del *PVEM*, ya que cuenta con otros elementos como nombre, clave de elector, domicilio, género, escolaridad y firma.

En conclusión, a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que las afiliaciones de las partes actoras a *PVEM* fueron apegadas a derecho, por lo que, puede afirmarse que las conductas realizadas por el justiciable resultan atípicas en relación con los injustos descritos en la normatividad electoral que le fueron imputados.

2. Supuestos en el que las cédulas de afiliación no fueron objetadas en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Por otro lado, por cuanto hace a **María Concepción Córdova Méndez y Francisco López Alarcón**, al responder a la vista que se le dio con el documento base exhibido por el partido político, y en vía de alegatos, manifestaron lo siguiente, respectivamente:

María Concepción Córdova Méndez

Vista y Alegatos

...

Deseo manifestar categóricamente que nunca me he afiliado al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por lo que se han hecho mal uso de mis datos personales y en consecuencia solicito se me desafilie del Partido en comento.

...

Francisco López Alarcón

Alegatos

...

1.- Reitero mi desconocimiento y rechazo a la afiliación hecha en mi nombre al Partido Verde Ecologista de México.

2.- La solicitud de registro o afiliación presentada como prueba es incompleta y presenta vicios e inconsistencias que la invalidan. A saber:

- a) La información fue llenada con letra que no corresponde a la mía.*
- b) La sección electoral no corresponde a la copia de credencial de elector utilizada.*
- c) La escolaridad manifestada no corresponde con la de mi persona.*
- d) El género no está especificado.*
- e) No se especifica número telefónico fijo ni de celular.*
- f) No se especifica la dirección de correo electrónico.*
- g) La firma presentada es una burda imitación de mi firma, por lo que la desconozco y manifiesto que es inválida.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

- h) No hay marca en el recuadro donde se manifiesta haber leído y aceptado los términos.*
- i) La credencial de elector presentada es una copia de múltiples copias fotostáticas sucesivas de una copia, no de la credencial original.*
- j) La información omitida y referida líneas arriba en los incisos c, d, e y f no se presenta por que al no haberme hecho presente de forma alguna, la desconoce quién me afilió sin mi consentimiento.*
- k) Tampoco están los datos de contacto, porque de haber existido un interés genuino de mi parte para afiliarme ese instituto político, yo los habría proporcionado para estar informado y al tanto de las actividades partidistas y participar en ellas.*

3.- Por ultimo y no menos importante, manifiesto que he participado en todos los procesos electorales locales y federales desde 2009 como Capacitador Asistente Electoral y/o como Supervisor Electoral, actividades en la que es indispensable no estar registrado en partido político alguno, requisito que conozco perfectamente y sé que el estar registrado en un partido político me inhabilitaría para ello, razón por la cual es completamente improbable que me haya inscrito por cuenta propia en un partido político.

De lo expresado en este punto obran en la 05 Junta Distrital del INE en Tamaulipas registros de mis actividades a disposición de quien lo requiera.

...

De las manifestaciones antes relatadas, se advierte que él y la denunciante, cuyo caso aquí se analiza expresan oposición a dicho documento, al referir, entre otras cuestiones que desconocen la afiliación, el haber llenado el respectivo formato, la letra y firma, solicitan la baja del padrón de militantes del partido, que los datos de la cédula no son legítimos.

Sin embargo, debe precisarse que tales declaraciones se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establecieron las razones concretas que, en su caso, apoyaran sus respectivas objeciones, ni tampoco aportaron los elementos idóneos para acreditar sus manifestaciones, lo anterior, con la finalidad de invalidar la fuerza probatoria de las pruebas aportadas por el denunciado, por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

En efecto, no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas.

No pasa desapercibido que el ciudadano en cuestión aporta como elemento de prueba para acreditar que no es militante del *PVEM*, copias de los diplomas obtenidos por haber participado como Capacitador Asistente Electoral en los

procesos electorales 2018-2019, 2017-2018 y 2015-2016, sin embargo, los mismos no son idóneos para acreditar su dicho en el presente asunto porque:

- En estos no se aprecia su firma o algún elemento para acreditar la diferencia entre las escrituras;
- Los documentos datan de fechas **anteriores** a la que presuntamente fue afiliado, ya que su registro de militancia corresponde al veintiuno de enero de **dos mil veinte**.

En ese sentido, si una de las partes se limita a objetar de manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la contraparte, sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor, ni aporta elementos para acreditar su dicho, su objeción no es susceptible de restar valor a las pruebas objeto del cuestionamiento.

Por tanto, si las partes denunciantes objetaron los formatos de afiliación aportados por el *PVEM*, al referir que desconocen la afiliación, el haber llenado el respectivo formato, la letra y firma, así como los datos de la cédula, debieron especificar las razones concretas en que apoyaban su argumento, así como aportar los elementos probatorios idóneos para tratar de acreditar su dicho; además debieron especificar los motivos precisos que consideraban al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor del documento aportado, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

En efecto, no basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones en que apoyaban la misma y **aportar los elementos idóneos para acreditarlas**, para lo cual, no solo debieron indicar el aspecto que no reconocían, o el por qué no podía ser valorada positivamente por la autoridad, sino que debieron aportar los medios de prueba que estimaran conducentes, tendentes a acreditar que efectivamente las firmas contenidas en los formatos de afiliación exhibido por *PVEM* no era la de ellos, como podría ser, algún documento en el que se hubiera estampado su rúbrica, la pericial en materia de grafoscopia o cualquier otra que consideraran oportuna, pero no lo hicieron.

De tal manera, debe concluirse que las partes denunciantes, cuyo caso se analiza en este apartado, faltaron a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar aquellas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción de los documentos bajo análisis, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

3. Supuesto en el que, no obstante haber objetado debidamente la cédula de afiliación, se tuvo por desierta la prueba pericial en grafoscopía.

En el caso del denunciante **César Adrián Tovar Zamora**, al momento de desahogar la vista que le fue formulada, manifestó lo siguiente:

César Adrián Tovar Zamora

Vista

Por medio del presente escrito de mi puño y letra yo César Adrián Tovar Zamora declaro que el documento que el Partido Verde Ecologista de México de la campaña de actualización de afiliación 2016-2017 presenta datos que no fueron proporcionados por mí y que claramente no fueron escritos por mí, destacando que mi segundo nombre esta incorrecto, además mi firma no está escrita por mí, ni esta correcta.

Hágase comparar este escrito con el documento presentado por el Partido Verde ecologista de México para confirmar que la escritura es diferente de la mía, demostrando que la afiliación fue hecha sin mi consentimiento.

De las manifestaciones antes relatadas, se advierte que el denunciante, cuyo caso aquí se analiza expresa oposición a dicho documento, al referir, entre otras cuestiones, que no proporcionó los datos que tiene el documento aportado por el PVEM, que la letra y firma, no son del quejoso.

A partir de lo anterior, la autoridad instructora consideró necesario el desahogo de una **pericial en grafoscopía**, a efecto de tener mayores elementos encaminados a determinar si medió la voluntad del denunciante para suscribir el citado documento.

En virtud de lo anterior, por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, se requirió a **César Adrián Tovar Zamora**, a efecto de que en el plazo improrrogable de **tres días hábiles**, aportaran algunos **documentos originales** y se presentara ante la Junta Local o Distrital más cercana a su domicilio, a efecto de que funcionarios de dichos órganos **tomaran las muestras de las firmas necesarias para el desahogo de la prueba pericial** respectiva, apercibido que en caso de **no comparecer dentro del plazo previamente señalado, se tendrá por desierta la prueba y se resolverá con las constancias existentes en autos.**

En el mismo acuerdo, también se les dio vista con un cuestionario, que en su momento procesal oportuno sería sometido a consideración del perito en grafoscopía, a efecto de que, de ser el caso, adicionara las preguntas que considerara pertinentes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

El citado acuerdo fue notificado en los términos siguientes:

Persona notificada	Notificación personal	Respuesta
César Adrián Tovar Zamora	Cédula 15 de julio de 2022 Plazo del 18 al 20 de julio de 2022.	Sin respuesta

No obstante haber sido debidamente notificado el denunciante, omitió desahogar la vista formulada, por lo tanto, mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, **se hizo efectivo el apercibimiento** formulado en el acuerdo de doce de julio del mismo año, en consecuencia, **se tuvo por desierta la prueba pericial en grafoscopía.**

En ese sentido, toda vez que dichas objeciones no puede concatenarse con la pericial en comento, **no son susceptibles de restar valor a la cédula de afiliación proporcionada** por el *PVEM*.

Por tanto, si el denunciante indico que los datos del formato afiliación aportado por el *PVEM*, *no fueron proporcionados por él y que la letra y firma no fueron plasmadas por el quejoso*, debió especificar las razones concretas en que apoyaban su argumento, así como **aportar y desahogar en tiempo y forma los elementos probatorios idóneos para tratar acreditar su dicho**; además debió especificar los motivos precisos que consideraban al caso, lo anterior, con la finalidad de desvirtuar el valor de los documentos aportados, sin embargo, esto no ocurrió, y en consecuencia sus objeciones no son susceptibles de ser atendidas por esta autoridad.

En efecto, no basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones en que apoyaban la misma y **aportar los elementos idóneos para acreditarlas**, para lo cual, no solo debió indicar el aspecto que no reconocía, o el por qué no podía ser valorada positivamente por la autoridad, sino que debió desahogar en tiempo y forma los medios de prueba que estimara conducentes, tendentes a acreditar que efectivamente la letra y firma contenida en el formato de afiliación exhibido por el *PVEM* no era del denunciante, pero no lo hizo, tal y como ha quedado detallado previamente.

Por tanto, en virtud de que sus respectivos alegatos se desarrollaron en torno a que no proporciono los datos que tiene el documento aportado por el *PVEM*, que la letra y firma ahí contenida no era la suya, la prueba idónea para refutar la misma y, en el caso, para acreditar su dicho, lo era la pericial en materia de grafoscopía tal y como

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

ha sido establecido en las Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11²³² de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS** e III.1o.C. J/29,²³³ de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).**

En síntesis, **César Adrián Tovar Zamora**, si bien realizó manifestaciones en relación al formato de afiliación, también lo es que, no cumplió con desahogar en tiempo y forma la información que les fue solicitada para el debido desarrollo de la prueba pericial en grafoscopia, por lo que se considera que **dichas objeciones no son suficientes para desvirtuar la legalidad del formato de afiliación exhibido por el PVEM.**

Por todo lo anterior, y a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que no existen elementos para considerar que la afiliación de **las diecisiete personas denunciantes** (cuyo caso se analiza en este apartado) al **PVEM** no fue apegada a derecho.

Así, la cadena de indicios mencionada no resultó fragmentada por la omisión y manifestaciones de las referidas personas, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las partes quejas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de denuncia, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En conclusión, a partir de los razonamientos previamente establecidos, esta autoridad considera que las afiliaciones de dichas personas fueron apegadas a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normativa electoral que le fueron imputados.

²³² Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del PVEMmer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

²³³ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, PVEMmer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre de la persona para ser afiliada.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la *LGPP* en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación de estas personas a *PVEM*, sino también la ausencia de voluntad de las mismas para ser afiliadas, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se justificó la afiliación de las partes denunciadas sin evidenciar la ausencia de voluntad de las mismas en esos actos, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *LGPP*, ya que al concluirse que las personas quejasas se afiliaron libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que *PVEM* no utilizó indebidamente la información y datos personales de los impetrantes, porque estos, en su oportunidad, consintieron afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente resolución, era menester proporcionar al partido político esa información y los documentos atinentes.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer a *PVEM* sanción alguna.

Similar consideración estableció el *Consejo General*, entre otras, en las determinaciones INE/CG471/2020 e INE/CG475/2021, dictadas el siete de octubre de dos mil veinte y veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves UT/SCG/Q/YGDC/JD01/QROO/60/2019 y UT/SCG/Q/CAVP/JD09/JAL/174/2020, respectivamente.

Ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad de las y los ciudadanos para afiliarse voluntariamente a un partido político, **no fue transgredido** por el partido *PVEM*, toda vez que acreditó con las documentales idóneas, que la afiliación de estas personas se efectuó mediando la voluntad de las mismas para afiliarse a sus filas y, por tanto, su incorporación al padrón de militantes del partido se hizo conforme a sus estatutos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, ya referida cuyo contenido es el siguiente:

DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político. Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

Es por ello que, **se tiene por no acreditada la infracción** en el procedimiento sancionador ordinario, consistente en la supuesta transgresión al derecho político de libre afiliación de **las diecisiete personas denunciantes**, cuyo caso se analizó en el presente apartado, por los argumentos antes expuestos.

Ahora bien, más allá de que se tiene por no acreditada la infracción imputada a *PVEM*, es importante precisar que las personas quejasas, en su oportunidad, fueron dadas de baja del padrón de afiliados de partido político denunciado, como se advierte de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora.

APARTADO B
Personas de quienes el *PVEM* conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

1. Supuestos en los que el PVEM no aportó documento alguno para acreditar la debida afiliación.

Como ha quedado precisado el PVEM reconoció la afiliación de **Michelle Hairam Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría**; situación que fue corroborada por la DEPPP, quien, además, proporcionó la fecha en que estas personas fueron afiliadas al partido:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Michelle Hairam Santiago Armenta	10/05/2017
2	Karina Obregón Alonso	20/10/2016
3	Alejandro Ayón Luna	09/10/2019
4	Aurora María Olvera Méndez	10/09/2019
5	Heriberto Rogel Martínez	02/11/2016
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría	10/10/2016

Al respecto, el **PVEM no aportó documento alguno** del cual fuera posible desprender que la afiliación de Michelle Hairam Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría, se realizaron de forma individual, voluntaria, personal, pacífica y en los términos establecidos en su normativa interna.

Por lo que, ante la falta de documentación idónea que permita acreditar de manera fehaciente la voluntad de las personas quejas de referencia para afiliarse al partido político denunciado, existe evidencia que hace suponer que dichas afiliaciones fueron producto de una acción ilegal por parte del PVEM.

En efecto, como se demostró anteriormente, Michelle Hairam Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría, aparecieron afiliados al PVEM, quienes manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Lo anterior pues en los seis casos analizados, el denunciado no demostró que las afiliaciones se realizaron a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichas personas hubieran dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hubieran permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman

necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, y ante la negativa de los denunciantes de haberse afiliado al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que las afiliaciones se llevaron a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo en ningún caso.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PVEM* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría, sobre los que se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente demostrado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por lo anterior, en el presente procedimiento ordinario sancionador se considera que **le asiste la razón a Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría**, al haberse acreditado plenamente la responsabilidad del *PVEM* relacionada con la indebida afiliación de los citados quejosos materia de pronunciamiento en este procedimiento.

2. Supuesto en el que existe discordancia en la fecha de afiliación informada, tanto por la *DEPPP*, como la reflejada en la cédula aportada por el *PVEM*.

El partido *PVEM* exhibió el original del formato de afiliación a nombre de Lidia Hernández Hernández, a fin de acreditar, según su dicho, que el registro aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos, para tal efecto, en su normativa interna, toda vez que en dicho documento consta firma autógrafa, sin

embargo, **existe discordancia en las fecha de afiliación informada, tanto por la DEPPP como la reflejada en la cédula aportada por dicho ente político, como lo observamos en la tabla siguiente:**

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada por la DEPPP a requerimiento expreso de la UTCE	Fecha que se aprecia en el original de la cédula de afiliación
Lidia Hernández Hernández	29/09/2016	<u>04/10/2016</u> ²³⁴

En el caso, una vez que esta autoridad examinó el cúmulo probatorio que obra en autos, identificó inconsistencias en cuanto a la cronología de los hechos, pues en los casos que se analizan en el presente apartado, se advierte lo siguiente:

- La fecha de registro que obra en los archivos de **DEPPP**, difiere de la que consta en la cédula de afiliación aportada por **PVEM**.
- La fecha que consta en la cédula de afiliación aportada por **PVEM**, es diferente y **posterior** a la fecha de registro con que cuenta la **DEPPP**.

En consecuencia, se concluye que el formato de afiliación exhibido por **PVEM**, para acreditar la legalidad de la afiliación de **Lidia Hernández Hernández**, **no es el documento fuente del cual emana el registro de la persona quejosa como militante de ese instituto político.**

Por tanto, a consideración de este órgano resolutor, el documento exhibido por el partido político denunciado, no es válido para acreditar la legal afiliación de **Lidia Hernández Hernández**, toda vez que existe presunción fundada de que fue creado y/o alterado para atender lo requerido por la autoridad instructora, sin tener coherencia respecto de la fecha de los hechos acreditados, como lo es la de afiliación registrada por el propio partido político denunciado en el Sistema para la Verificación del Padrón de Afiliados del **INE**.

²³⁴ Visible a hoja 358 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Sobre esto último, criterio similar sostuvo este *Consejo General*, entre otras, en la resolución INE/CG469/2020,²³⁵ INE/CG182/2021²³⁶, INE/CG82/2022,²³⁷ e INE/CG470/2022,²³⁸ de siete de octubre de dos mil veinte y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; cuatro de febrero y veinte de julio de dos mil veintidós, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con la clave UT/SCG/Q/FJLG/JD08/VER/148/2018, UT/SCG/Q/LRA/JD04/COAH/23/2020, UT/SCG/Q/CPE/JD12/MEX/162/2020 y UT/SCG/Q/IPP/JD11/MICH/42/2021 respectivamente.

En conclusión, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que **PVEM** infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **Lidia Hernández Hernández**, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** para ser registrada como militante de ese partido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**.

Así pues, el **PVEM** en el caso analizado, no demostró que la afiliación de **Lidia Hernández Hernández**, se realizara a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha persona haya dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la persona denunciante de haberse afiliado al **PVEM**, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de medios de prueba idóneos, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales

²³⁵ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114990/CGex202010-07-rp-1-154.pdf>

²³⁶ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118865/CGex20210319-rp-1-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²³⁷ Consulta disponible en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126905/CGex202202-04-rp-5-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²³⁸ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/140701/CGex202207-20-rp-1-36.pdf>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo en ningún caso.

Es decir, no basta con que la persona quejosa aparezca como afiliada al **PVEM** en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al **PVEM** implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de la persona quejosa, sobre quien se acredita la transgresión denunciada en el presente procedimiento y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las resoluciones **INE/CG458/2020**,²³⁹ **INE/CG182/2021**²⁴⁰ e **INE/CG69/2022**,²⁴¹ dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y cuatro de febrero de dos mil veintidós, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con la clave UT/SCG/Q/NSC/JD03/MICH/196/2018, UT/SCG/Q/LRA/JD04/COAH/23/2020 y UT/SCG/Q/VMV/JD03/DGO/195/2021, respectivamente.

²³⁹ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115001/CGex202010-07-rp-1-166.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁴⁰ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118865/CGex20210319-rp-1-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁴¹ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126890/CGex202202-04-rp-5-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

3. La firma plasmada en el formato de afiliación no fue emitida por el denunciante

De las constancias que obran en el expediente se advierte que el *PVEM* aportó el original de la cédula de afiliación de José Ángel Zambrano López.

Al respecto, si bien dicho ciudadano no desahogó la vista formulada mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, en relación con el formato de afiliación exhibido por el *PVEM*, José Ángel Zambrano López al formular alegatos, objetó el referido documento, además de que ofreció las pruebas que estimó idóneas, a efecto de desvirtuar el documento base del partido político, conforme a lo siguiente:

José Ángel Zambrano López

POR MEDIO DE LA PRESENTE (ESCRITO) DE PUÑO Y LETRA YO JOSE ANGEL ZAMBRANO LOPEZ. DECLARO QUE EL DOCUMENTO QUE EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PRESENTA SOBRE MI SUPUESTA AFILIACIÓN, PRESENTA DATOS QUE NO FUERON PROPORCIONADOS POR MI Y QUE CLARAMENTE NO FUERON ESCRITOS POR MI, ADEMÁS MI FIRMA NO ESTA ESCRITA POR MI, NI ESTA CORRECTA, POR LO TANTO NO COINCIDE CON MI INE.

HAGASE COMPARAR ESTE ESCRITO CON EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PARA CONFIRMAR QUE LA ESCRITURA ES DIFERENTE DE LA MIA, DEMOSTRANDO QUE LA AFILIACIÓN FUE HECHA SIN MI CONSENTIMIENTO.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE NO HE PROPORCIONADO DATOS PERSONALES AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.

Como se precisó previamente, el medio de prueba idóneo para sustentar la alegación relativa a que la firma plasmada en las cédulas no corresponde con la de las denunciantes, es la prueba pericial en grafoscopía, grafología o caligrafía, pues únicamente una persona con conocimientos especiales, es decir un perito en la materia, puede corroborar que la firma de una persona no corresponde con la plasmada en el documento cuestionado.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio orientador emitido por el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29242, que sostuvo lo siguiente:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

En el caso concreto, a **José Ángel Zambrano López**, desconoce la firma plasmada en la cédula aportada por el PVEM y solicita el cotejo de su letra estampada en el citado documento con la plasmada en la cédula de afiliación para evidenciar su discordancia.

Por lo anterior, al existir duda en cuanto a la autenticidad del documento aportado por el PVEM, la autoridad instructora consideró necesario el desahogo de una **pericial en grafoscopia**, a efecto de tener mayores elementos encaminados a determinar si medió la voluntad de las denunciantes para suscribir los citados documentos, por lo cual, se solicitó el auxilio del Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a efecto de que designara un perito especializado, para la elaboración del peritaje solicitado.

Mediante oficio FOLIO:55346, Jaime Linares Zamora, persona perita en Materia de Grafoscopia y Documentoscopia, emitió dictamen pericial, en el siguiente sentido:

CONCLUSIÓN

ÚNICA.- No tiene el mismo origen gráfico la forma que aparece suscribiendo sobre la línea "FIRMA" en el documento que se lee "FORMATO" CAMPAÑA DE

²⁴² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019”, a nombre de “JOSÉ ÁGEL ZAMBRANO LÓPEZ”, con número de foliode fecha 20/04/2019, tomando en relación, las firmas señaladas como base d cotejo a nombre del SR. “JOSÉ ÁNGEL ZAMBRANO LÓPEZ”, lo anterior debido a las razones de índole técnico que se aluden en el cuerpo del presente

Ahora bien, como se señaló previamente, la firma en la cédula de afiliación es un elemento indispensable para acreditar la voluntad de los ciudadanos para expresar su consentimiento para ser afiliados, pues con la firma se ve reflejada la conformidad con el documento en que se estampa.

Situación que tal como quedó precisado en líneas arriba, en el caso no ocurrió, pues José Ángel Zambrano López manifestó mediante escrito de diez de junio de dos mil veintidós, que la letra y firma plasmadas en la cédula de afiliación aportada por el *PVEM* no correspondían con la suya.

Lo cual quedó demostrado al concatenarse el dicho del ciudadano con el resultado de la prueba pericial realizada, en la que se determinó, en el apartado “CONCLUSIONES”, que **la firma que obra en la cédula de afiliación, por su ejecución no corresponde al quejoso.**

De lo anterior, se advierte que se produce convicción sobre lo manifestado por el ciudadano y se desvirtúa la veracidad del documento aportado por el denunciado, para acreditar que el ciudadano se afilió voluntariamente al *PVEM*.

Por tanto, este órgano colegiado considera que **el *PVEM* infringió la normativa electoral respecto al derecho a la libre afiliación de José Ángel Zambrano López.**

No pasa inadvertido que el *PVEM* refiere que la afiliación fue voluntaria y que no existe uso indebido de datos personales, pues le fueron entregados los insumos necesarios por parte del ciudadano para realizar la respectiva afiliación, pues la información necesaria para afiliarlo, únicamente pudo ser proporcionada por el propio ciudadano.

De igual forma, manifiesta que el dictamen pericial en grafoscopia que obra en el expediente no otorga certeza a la materia de la litis, toda vez que el perito no da una respuesta clara sobre lo cuestionado, y que existe una inequidad procesal porque la objeción se realizó al momento de dar respuesta a la vista de alegatos y no cuando se le dio vista con la cédula.

En relación con esto último se precisa que la vista que inicialmente se le dio al denunciante estuvo vinculada con el procedimiento de contratación de Capacitadores Asistentes y Supervisores Electorales, pues con su respuesta o falta de esta se le daría vista a la Dirección de Capacitación de la Dirección Ejecutiva de Capacitación de este Instituto.

Además, la instrucción de dar trámite a la prueba pericial se dio porque la autoridad instructora advirtió que existía una duda en cuanto a la autenticidad del documento con el que se pretendió acreditar la afiliación.

Ahora bien, no obstante, lo manifestado por el denunciado, como se precisó previamente, la carga de la prueba corresponde al *PVEM* que afirma que la afiliación fue voluntaria.

En relación con la presunta falta de certeza que alude el denunciado la misma no se actualiza, porque con independencia de que se haya dado respuesta o no a sus cuestionamientos, **el perito definió que la firma cuestionada no correspondía a la del denunciante**, lo cual fue el objeto de la prueba en comento.

Además de que, el análisis a las mismas, **en nada contribuiría a esclarecer el fondo del presente asunto**, ya que, en diversos asuntos, entre otros en la resolución INE/CG688/2022, donde se estudió un dictamen pericial, al momento de atender a estas preguntas que también realizó el *PVEM*, se señaló que depende de cada caso concreto.

a) ¿Si al paso del tiempo y la práctica es posible que una persona haya modificado en pequeños detalles la forma de su firma y letra?

Respuesta: *Dependerá de cada persona y la temporalidad.*

c) ¿Es posible que alguien pueda cambiar su firma con la expedición de nuevas credenciales?

Respuesta: *Dependerá de cada persona y la situación*

Y por lo que respecta a los documentos empleados para el cotejo, los mismos fueron debidamente relacionados en el dictamen pericial.

En ese sentido, es importante precisar que, de las pruebas de autos, se advierte que el denunciado no demostró con pruebas idóneas, que el ciudadano hubiese dado su consentimiento para ser afiliado, ni mucho menos que hubiese entregado

sus datos personales para tal fin, por lo que su dicho no resulta suficiente para acreditar la voluntad del quejoso de pertenecer a sus filas.

Por lo anterior y ante la negativa del denunciante de haberse afiliado voluntariamente al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar que la afiliación se llevó a cabo mediante los mecanismos legales establecidos para ello, y por tanto, debió aportar pruebas idóneas, en las que constara fehacientemente la libre voluntad del hoy promovente, lo que no hizo, pues como se detalló, **la documental de la que el partido político denunciado pretende desprender la aceptación del quejoso, fue desvirtuada al concatenar lo manifestado por el denunciante y la prueba pericial respectiva.**

Por lo que, en el presente caso se considera que **le asiste la razón a José Ángel Zambrano López**, al haberse acreditado plenamente la responsabilidad del *PVEM* relacionada con la indebida afiliación del quejoso materia de pronunciamiento en este procedimiento.

En conclusión, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que *PVEM* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **José Ángel Zambrano López**, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** para ser registrada como militante de ese partido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.**

Así pues, el *PVEM* en el caso analizado, no demostró que la afiliación **José Ángel Zambrano López**, se realizara a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha persona haya dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la persona denunciante de haberse afiliado al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de medios de prueba idóneos, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo en ningún caso.

Es decir, no basta con que la persona quejosa aparezca como afiliada al **PVEM** en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de la quejosa en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al **PVEM** implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la ahora quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de la persona quejosa, sobre quien se acredita la transgresión denunciada en el presente procedimiento y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las resoluciones **INE/CG458/2020**,²⁴³ **INE/CG182/2021**²⁴⁴ e **INE/CG69/2022**,²⁴⁵ dictadas el siete de octubre de dos mil veinte, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, y cuatro de febrero de dos mil veintidós, al resolver los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con la clave UT/SCG/Q/NSC/JD03/MICH/196/2018, UT/SCG/Q/LRA/JD04/COAH/23/2020 y UT/SCG/Q/VMV/JD03/DGO/195/2021, respectivamente.

²⁴³ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115001/CGex202010-07-rp-1-166.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁴⁴ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118865/CGex20210319-rp-1-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁴⁵ Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126890/CGex202202-04-rp-5-16.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

CUARTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad por parte del **PVEM**, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PVEM	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la Constitución, la LGIPE y la LGPP, en el momento de su comisión.	La conducta fue la transgresión al derecho de libre afiliación (modalidad positiva) y el uso indebido de los datos personales de ocho personas , por parte del PVEM .	<i>Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 443, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la LGPP.</i>

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el partido **PVEM** afilió indebidamente en su padrón de militantes a **Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez, Martha Patricia Ramírez Santamaría, Lidia Hernández Hernández y José Ángel Zambrano López**, sin demostrar que para incorporarlos medió su voluntad de inscribirse como militantes de dicho instituto político, transgrediendo con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

Por otra parte, como se analizó, para la transgresión al derecho de libre afiliación acreditada en el expediente que se resuelve se usaron los datos personales de las personas promoventes sin que éstas hubiesen otorgado su consentimiento para ello, lo cual, constituye un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Esto es, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso infracción acreditada, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de las personas quejosas al padrón de militantes del partido político denunciado.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo argumentado en la sentencia de siete de junio de dos mil dieciocho dictada por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-141/2018, en la que se estableció, en lo que interesa sobre el tema, lo siguiente:

...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es

indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al **PVEM**.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La falta es **singular**, por lo siguiente:

Aun cuando se acreditó que el **PVEM** transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de **ocho personas**, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación al instituto político, quien incluyó en su padrón de militantes a las hoy personas quejasas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

Cabe precisar, que en apartados subsecuentes se analizará a detalle el impacto que tuvo dicha infracción.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al PVEM, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, de la Constitución; así como 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez, Martha Patricia Ramírez Santamaría, Lidia Hernández Hernández y José Ángel Zambrano López, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de estas personas de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidas.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

b) Tiempo y lugar. En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en las fechas y lugares que se precisan en la siguiente tabla:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Entidad
1	Michelle Hairam Santiago Armenta	10/05/2017	Baja California Sur
2	Karina Obregón Alonso	20/10/2016	Coahuila
3	Alejandro Ayón Luna	09/10/2019	Jalisco
4	Aurora María Olvera Méndez	10/09/2019	Oaxaca
5	Heriberto Rogel Martínez	02/11/2016	Veracruz
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría	10/10/2016	Veracruz
7	Lidia Hernández Hernández	29/09/2016	Veracruz
8	José Ángel Zambrano López,	20/04/2019	Chiapas

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la Constitución Federal; 5, párrafo 1; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El **PVEM** es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero; 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El **PVEM** está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*⁵, *párrafo 1* y 38, *párrafo 1, incisos a) y e)*, del *COFIPE*; *disposiciones contenidas en los diversos 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, inciso a)*, de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La transgresión a la libertad de afiliación es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las personas denunciantes aducen que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militantes al partido hoy denunciado.
- 2) Quedó acreditado que los quejosos aparecieron en el padrón de militantes del *PVEM*.
- 3) El partido político denunciado no demostró que las afiliaciones de las y el quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El *PVEM* no demostró ni probó que las afiliaciones de las **ocho** personas quejosas, fueran consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de los quejosos fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

Por el contrario, en el caso de **José Ángel Zambrano López**, se demostró que el denunciado actuó dolosamente al presentar dentro del procedimiento

documentación falsa a esta autoridad electoral, consistente en la cédula de afiliación cuya firma no corresponde al hoy quejoso, en términos de lo determinado por el perito en grafoscopia adscrito a la Fiscalía General de la República, a fin de engañar a esta autoridad, con el propósito de hacer creer que la afiliación que en un momento fue controvertida por el denunciante había sido realizada con su consentimiento y en pleno apego a Derecho; situación que fue desmentida, al momento de practicar diligencias de investigación adicionales que así lo corroboraron.

Esta situación, en el presente caso, cobra especial relevancia pues pone en evidencia la intención del referido instituto político de conducirse con falsedad ante esta autoridad nacional electoral, toda vez que en lugar de admitir su responsabilidad respecto a los hechos denunciados, optó por allegar al procedimiento documentos apócrifos y, con ello, evitar ser sancionado por la vulneración al derecho de libre afiliación del denunciante, lo que denota un actuar indebido por parte del *PVEM*, que de forma evidente resulta contrario a los fines y objetivos que deben observar las entidades de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41 de la Constitución y 25, párrafo 1, inciso a) de la *LGPP* deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

- 5) El registro de afiliación de cinco de las personas denunciantes, se efectuó antes del veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fecha en la que se aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, como se muestra en el siguiente cuadro:

No.	Ciudadano	Fecha de afiliación
1	Michelle Hiram Santiago Armenta	10/05/2017
2	Karina Obregón Alonso	20/10/2016
4	Heriberto Rogel Martínez	02/11/2016
4	Martha Patricia Ramírez Santamaría	10/10/2016
5	Lidia Hernández Hernández	29/09/2016

- 6) La cancelación de los registros de afiliación, se efectuaron fuera de los plazos establecidos en el acuerdo **INE/CG33/2019**, como se muestra en el siguiente cuadro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

No.	Ciudadano	Fecha de cancelación
1	Michelle Hairam Santiago Armenta	16/12/2020
2	Karina Obregón Alonso	16/12/2020
3	Alejandro Ayón Luna	16/12/2020
4	Aurora María Olvera Méndez	16/12/2020
5	Heriberto Rogel Martínez	16/12/2020
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría	16/12/2020
7	Lidia Hernández Hernández	16/12/2020
8	José Ángel Zambrano López	16/12/2020

Sobre estos dos últimos puntos, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, **debían, indefectiblemente, contar con los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación**, ya que la facultad de reservar el registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; sin embargo, como ya se mencionó, en el caso que nos ocupa, el partido no reservó la afiliación de los quejosos, ni mucho menos acompañó la documentación comprobatoria.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la respectiva individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las personas denunciadas de ser sus militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y

compromiso de regularizar su padrón de agremiados, en los términos impuestos en este acuerdo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el **PVEM**, se cometió al afiliar indebidamente a **Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez, Martha Patricia Ramírez Santamaría, Lidia Hernández Hernández y José Ángel Zambrano López**, sin demostrar al acto volitivo de estas tanto de ingresar en su padrón de militante como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de las y los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la persona quejosa de militar en ese partido político.

Además, como se indicó, las afiliaciones de las personas denunciadas se realizaron sin contar con la documentación que amparara su voluntad para ser registrados como militantes, ya que, aconteció en una fecha en la que el **PVEM** tenía pleno conocimiento de las obligaciones que se imponían en el acuerdo INE/CG33/2019, entre ellas, el depurar sus padrones existentes **y, evidentemente, registrar a sus nuevos agremiados, con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Así pues, respecto a dichos registros, el partido **PVEM** debió contar y/o verificar que contaba con la respectiva cédula de afiliación para realizar el registro, a fin de evitar una contravención a la norma electoral, lo cual no aconteció.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

En el caso, sí se actualiza la reincidencia, conforme a las razones que se exponen a continuación.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el Tribunal Electoral, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN**.

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en los archivos de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra la resolución INE/CG448/2018, aprobada por el Consejo General, el once de mayo de dos mil dieciocho, la cual fue emitida

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, a efecto de sancionar al *PVEM*, por haber inscrito a su padrón de afiliados a una ciudadana sin su consentimiento. Resolución que fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el SUP-RAP-137/2018, el seis de junio de dos mil dieciocho.

Con base en ello, y tomando en consideración que las afiliaciones indebidas de **José Ángel Zambrano López, Aurora María Olvera Méndez y Alejandro Ayón Luna**, por las que se demostró las infracciones en el presente procedimiento, fueron realizadas el veinte de abril, diez de septiembre y nueve de octubre, todas del dos mil diecinueve, respectivamente, se estima que en el caso sí existe reincidencia, respecto de estos casos.

Similar criterio adoptó este *Consejo General*, al emitir, entre otras, la resolución INE/CG168/2021 el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que resolvió el procedimiento administrativo UT/SCG/Q/JLAR/JL/OAX/83/2020.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **ocho** personas denunciantes, al partido político, pues se comprobó que el *PVEM* las afilió sin demostrar contar con la documentación que acreditara que medió la voluntad de estas de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político.
- Además se demostró, que el denunciado actuó con dolo durante la sustanciación del procedimiento seguido en la presente causa, al adjuntar, en el caso relativo al ciudadano **José Ángel Zambrano López**, pruebas falsas en términos de los resultados arrojados por el peritaje practicado por la Fiscalía General de la República, a la cédula de afiliación exhibida por dicho instituto político, lo que se traduce en una actitud por demás reprochable y ajena a los fines que deben ser observados por entidades de interés público como lo son los partidos políticos.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la violación a la libertad de afiliación las personas denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del partido político denunciado.
- No existió un beneficio por parte de *PVEM*, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- Implicó una infracción o falta administrativa, toda vez que se configuró una conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.

- Si existe reincidencia por parte del *PVEM*, por lo que hace a los supuestos de **José Ángel Zambrano López, Aurora María Olvera Méndez y Alejandro Ayón Luna**.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, en los casos de **Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez, Martha Patricia Ramírez Santamaría y Lidia Hernández Hernández**, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejasas, lo que constituye una transgresión al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

Por otro lado, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido político denunciado como de **gravedad especial**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el *PVEM* no solamente infringió el derecho de libre afiliación de los hoy quejosos lo que constituye, por sí mismo, una violación a un derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en la Constitución, sino que además, actuó dolosamente durante la sustanciación del procedimiento, pretendiendo engañar a esta autoridad electoral, pues para intentar librarse de la responsabilidad que se le atribuía, pretendió acreditar la afiliación de **José Ángel Zambrano López**, con pruebas que se demostraron falsas, en términos de los resultados arrojados por el peritaje practicado por personal de la Fiscalía General de la República.

Actuar que, sin lugar a dudas, resulta contrario a los principios constitucionales que debe respetar el mismo y que debe ser considerado para la imposición de la sanción respectiva, por parte de esta autoridad electoral.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo de **PVEM**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**.

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General *INE/CG33/2019*” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el **PVEM**, advirtieron que a la transgresión del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyacía un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión,

actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos **cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.**

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la transgresión al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto TERCERO, se ordenó que en el caso de las quejas que se llegasen a presentar con posterioridad a la aprobación del Acuerdo en cita, los partidos políticos nacionales tendrían un plazo de diez días, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presentara la queja.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas hoy quejosas de su padrón de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acreditó la infracción** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del **PVEM**, aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo INE/CG33/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde a **PVEM**, por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.²⁴⁶ Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la intermediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría

²⁴⁶ Consultable en la página <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.”

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por PVEM, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGIPE*, toda vez que dicha actitud redundante en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, las afiliaciones de las personas denunciadas, si bien acontecieron en septiembre, octubre y noviembre de dos mil dieciséis; mayo de dos mil diecisiete; abril, septiembre y octubre de dos mil diecinueve, temporalidad en la que no le eran aplicables los beneficios del acuerdo INE/CG33/2019, pero que sí le obligaba a llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte de los militantes, lo que en el caso no ocurrió.

Ahora bien, en el caso concreto es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares, en cada uno de los casos, que llevaron a esta autoridad a determinar fundados los procedimientos ordinarios sancionadores incoados en contra del *PVEM*, tal como se ha precisado previamente.

Situaciones que deberán de ser tomadas en cuenta de forma individual al momento de imponer las sanciones correspondientes

En primer lugar, respecto a **Michelle Hiram Santiago Armenta, Karina Obregón Alonso, Alejandro Ayón Luna, Aurora María Olvera Méndez, Heriberto Rogel Martínez y Martha Patricia Ramírez Santamaría**, se determinó declara fundado el procedimiento, en virtud de que el partido político no aportó documental alguna para acreditar la voluntad de las personas quejas de querer afiliarse a dicho partido político, siendo que no reservó el registro de estas y, por otra, la baja de las personas denunciadas del padrón de militantes acontecieron el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, temporalidad en la que no le son aplicables los

beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, en ese momento ya había concluido la etapa de Consolidación de padrones,²⁴⁷ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

En cuanto a **Lidia Hernández Hernández**, se determinó declarar fundado el procedimiento, en razón de que la fecha que consta en la cédula de afiliación aportada por el *PVEM*, es diferente y posterior a la fecha de registro con que cuenta la *DEPPP*.

Ahora bien, respecto de **José Ángel Zambrano López**, se advierte la existencia de circunstancias extraordinarias, pues, como se precisó en el apartado respectivo el quejoso manifestó que la firma de la cédula de afiliación no correspondía con la suya, situación que fue corroborada mediante peritaje elaborado por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República.

Dicha situación cobra especial relevancia y no puede pasar desapercibida para este *Consejo General*, pues el *PVEM* no solo vulneró el derecho de libertad de afiliación y la utilización de los datos personales de José Ángel Zambrano López, sino que además actuó dolosamente y pretendió engañar a esta autoridad electoral, presentando documentación falsa para acreditar que la afiliación del quejoso se realizó con su consentimiento y así evitar ser sancionado por la indebida afiliación del mismo.

Tolo anterior, denota un actuar indebido por parte del *PVEM* que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del *PVEM*, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto

²⁴⁷ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PVEM* **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la **acción** de haber afiliado sin su consentimiento a **las personas denunciantes, materia del presente apartado**, estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue la

ausencia de la documentación de la que se desprenda la afiliación voluntaria; esto es, una vez transcurrido el periodo establecido por el Acuerdo INE/CG33/2019 (treinta y uno de enero de dos mil veinte); que se concluyó la existencia del dolo, y que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en los casos concretos, se considera imponer una las siguientes sanciones:

- **Multa equivalente a 963 (novecientos sesenta y tres)** unidades de medida y actualización (UMAs), al momento de la comisión de la conducta, **por las afiliaciones indebidas**, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se consideran las condiciones previamente descritas.

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, las identificadas con las claves **INE/CG483/2021**²⁴⁸ e **INE/CG1529/2021**,²⁴⁹ confirmadas a través de las sentencias dictadas en los expedientes **SUP-RAP-143/2021**²⁵⁰ y **SUP-RAP-427/2021**²⁵¹, respectivamente.

- **Multa equivalente a 1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la conducta, según corresponda, en aquellos casos en los que se acreditó la **reincidencia**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con la clave **INE/CG168/2021**.

²⁴⁸ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/120410/CGor202105-26-rp-10-4.pdf>

²⁴⁹ Consulta disponible en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125185/CGex202109-30-rp-1-12.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁵⁰ Consulta disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0143-2021.pdf

²⁵¹ Consulta disponible en: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/RAP/427/SUP_2021_RAP_427-1098342.pdf

Ahora bien, tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de José Ángel Zambrano López, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- El hecho de que el partido denunciado lo siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte;
- Que la afiliación indebida fue realizada en dos mil diecinueve;
- Que la falta fue calificada como grave especial;
- Que se concluyó la existencia del dolo, y
- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante.

Por ello, en principio, esta autoridad considera adecuado imponer una multa de **1,284 Unidades de Medida y Actualización** (mil doscientas ochenta y cuatro UMA's) vigentes al momento de la comisión de la conducta, es decir, en el año dos mil diecinueve (**\$84.49** –ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.),⁵⁷ **equivalente a \$108,485.16** (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100), por cada una de las referidas ciudadanas.

No obstante, para este caso, cuya gravedad fue calificada como especial, se debe destacar la existencia de circunstancias extraordinarias, pues, como se precisó en el apartado respectivo, las personas denunciantes manifestaron que la firma de las cédulas de afiliación no correspondía con la suya, situación que fue corroborada mediante peritaje elaborado por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República.

Dicha situación cobra especial relevancia y no puede pasar desapercibida por este Consejo General, pues el *PVEM* no sólo vulneró el derecho de libertad de afiliación y la utilización de los datos personales de José Ángel Zambrano López, sino que además presentó documentación falsa para acreditar que la afiliación de estas se realizó con su consentimiento y así evitar ser sancionado por la indebida afiliación de este.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la indebida afiliación de José Ángel Zambrano López, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue la presentación de una cédula de afiliación falsa para

acreditar su afiliación y el uso indebido de sus datos personales para tal fin, pues como quedó precisado previamente, los mismos constituyen un insumo necesario para que un instituto político pueda afiliar a una persona, **esta autoridad considera adecuado imponer, adicional a la cantidad antes precisada, una multa de 2,000 (dos mil) Unidades de Medida y Actualización**, al momento de la comisión de la conducta.

Por tanto, para este caso, la multa total a imponer por José Ángel Zambrano López, será de **3,284 (tres mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización**, vigentes al momento de la comisión de los hechos, es decir, en el año dos mil diecinueve (**\$84.49** –ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.), **equivalente a \$277,465.16** (doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 16/100).

La propuesta de todas estas multas, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

Lo anterior, se robustece con lo establecido en la Jurisprudencia de la Sala Superior 10/2018, de rubro y texto:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

Para el caso que nos ocupa, al haberse cometido la infracción con posterioridad a la reforma en comento, el monto se calculará multiplicando el valor de la Unidad de Medida y Actualización, por la suma precisada.

Precisado lo anterior, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento,

a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,²⁵² emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.*

²⁵² Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Así, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) **Unidades de Medida y Actualización**²⁵³ o, **963** (novecientos sesenta y tres) **días de salario mínimo general para el Distrito Federal**,²⁵⁴ según corresponda, al momento de la comisión de la conducta, **por cada una de las personas que se considera fueron afiliadas indebidamente, así como por el uso indebido de sus datos personales, incrementando el monto de la sanción en el caso en el que se acreditó la reincidencia, para imponer 1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la conducta, según corresponda, siendo que, en el caso en los que además se calificó la **falta como especial** al haberse aportado documentación falsa para pretender acreditar la afiliación a sanción se incrementa a **3,284** (tres mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización o, a 3,284 (tres mil doscientos ochenta y cuatro) días de salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en el año de la conducta, para quedar en los siguientes términos:

PVEM					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	Karina Obregón Alonso	20/10/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
2	Heriberto Rogel Martínez	02/11/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
3	Martha Patricia Ramírez Santamaría	10/10/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
4	Lidia Hernández Hernández	29/09/2016	963	\$73.04	\$70,337.52
5	Michelle Hairam Santiago Armenta	10/05/2017	963	\$75.49	\$72,696.87
TOTAL					\$354,046.95 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

PVEM					
Casos en los que además existe reincidencia					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	Alejandro Ayón Luna	09/10/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16

²⁵³ En lo sucesivo *UMA*.

²⁵⁴ En lo subsecuente *SMGVDF*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

PVEM Casos en los que además existe reincidencia					
No.	Ciudadanos	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
2	Aurora María Olvera Méndez	10/09/2019	1,284	\$ 84.49	\$108,485.16
TOTAL					\$216,970.32 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

PVEM					
No.	Ciudadano	Fecha de afiliación	Sanción en UMAs	Valor de la UMA	Sanción a imponer
1	José Ángel Zambrano López	20/04/2019	3,284	\$ 84.49	\$277,465.16
TOTAL					\$277,465.16 [Cifra calculada al segundo decimal, salvo error aritmético].

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**²⁵⁵

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PVEM** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

²⁵⁵ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

Se estima que la infracción cometida por parte del partido **PVEM**, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, emitido por la **DEPPP**, se advierte que al partido **PVEM** le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **noviembre** de dos mil veintidós, la cantidad de \$ 19,751,300.62 (Diecinueve millones, setecientos cincuenta y un mil, trescientos pesos 62/100 M.N.).

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el porcentaje siguiente:

PVEM				
No.	Ciudadano	Año de afiliación	Monto de la sanción por ciudadano	Porcentaje de la ministración mensual por persona²⁵⁶
1	Michelle Hiram Santiago Armenta	2017	\$72,696.87	0.37%
2	Karina Obregón Alonso	2016	\$70,337.52	0.36%
3	Alejandro Ayón Luna	2019	\$108,485.16	0.55%
4	Aurora María Olvera Méndez	2019	\$108,485.16	0.55%
5	Heriberto Rogel Martínez	2016	\$70,337.52	0.36%
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría	2016	\$70,337.52	0.36%
7	Lidia Hernández Hernández	2016	\$70,337.52	0.36%
8	José Ángel Zambrano López	2019	\$277,465.16	1.4%

²⁵⁶ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta a **PVEM** no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por **PVEM** (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—²⁵⁷ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LGIE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el partido **PVEM**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

²⁵⁷ Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,²⁵⁸ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano, previsto en el artículo 79 del referido ordenamiento legal, para el caso de los denunciantes.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de las **diecisiete personas** que se citan a continuación, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO, punto 6, apartado A**, de esta resolución.

No.	Persona denunciante
1	Ana Rosa Figueroa Carrizales
2	Brandon Esteban Martínez Villeda
3	Karina Ivón López Mayo
4	Sandra Cruz Reynoso García
5	Mirza Elizabeth Velázquez Gómez
6	Juan Ramón Eric García Guerrero
7	Heriberto Aragón Guevara
8	Jesús Andrade Fierro
9	Perla Paulina García Barrera
10	Reyna Griselda Navarro Mercado

²⁵⁸ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

No.	Persona denunciante
11	Gilberto Espinoza Álvarez
12	Gloria Jimena Montaña López
13	Eduarda Esmeralda Castillo Calvillo
14	José Antonio Caudillo Coral
15	María Concepción Córdova Méndez
16	Francisco López Alarcón
17	César Adrián Tovar Zamora

SEGUNDO. Se acredita la infracción atribuida a **Partido Verde Ecologista de México**, consistente en la afiliación indebida y uso de datos personales, para tal efecto, en perjuicio de las **ocho personas** que se citan a continuación, en términos de lo establecido en el Considerando **TERCERO, punto 6, apartado B**, de esta resolución.

No.	Persona
1	Michelle Hiram Santiago Armenta
2	Karina Obregón Alonso
3	Alejandro Ayón Luna
4	Aurora María Olvera Méndez
5	Heriberto Rogel Martínez
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría
7	Lidia Hernández Hernández
8	José Ángel Zambrano López

TERCERO. En términos del Considerando CUARTO de la presente resolución, se impone al **Partido Verde Ecologista de México**, una multa por la indebida afiliación de cada una de las **personas aludidas en el punto que antecede**, conforme a los montos que se indican a continuación:

N°	Persona	Sanción a imponer
1	Michelle Hiram Santiago Armenta	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$72,696.87 [setenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos 87/100] [Ciudadana afiliada en 2017]
2	Karina Obregón Alonso	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$70,337.52 [setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100] [Ciudadana afiliada en 2016]

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

N°	Persona	Sanción a imponer
3	Alejandro Ayón Luna	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100] [Ciudadano afiliado en 2019]
4	Aurora María Olvera Méndez	1284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100] [Ciudadana afiliada en 2019]
5	Heriberto Rogel Martínez	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$70,337.52 [setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100] [Ciudadano afiliado en 2016]
6	Martha Patricia Ramírez Santamaría	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$70,337.52 [setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100] [Ciudadana afiliada en 2016]
7	Lidia Hernández Hernández	963 [novecientos sesenta y tres] Unidades de Medida y Actualización, equivalente a \$70,337.52 [setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100] [Ciudadana afiliada en 2016]
8	José Ángel Zambrano López	3,284 [tres mil doscientas ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$277,465.16 [doscientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 16/100 M.N.] [Ciudadano afiliado en 2019]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **Partido Verde Ecologista de México**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando QUINTO.

QUINTO. De conformidad con de lo indicado en la parte final del **Considerando CUARTO**, numeral 6, apartado B, dese vista a la Fiscalía Especializada en Delitos

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Electorales para que en el ámbito de su competencia conozca respecto de la documentación irregular que aportó el denunciado para acreditar la afiliación de José Ángel Zambrano López, a efecto de que sea dicha instancia quien determine lo conducente.

SEXTO. Se dejan a salvo los derechos de José Ángel Zambrano López, a fin de que, si es su deseo hacerlo, hagan valer, por la vía correspondiente y ante la autoridad competente, los hechos relacionados con la presunta falsificación de su firma

SÉPTIMO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

OCTAVO. NOTIFÍQUESE, personalmente a las personas denunciantes; al Partido Verde Ecologista de México por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral;** y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/ARFC/JD02/COL/245/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**